

# Armas de barrio

Luchas por la vivienda  
y autoorganización

Título original: *Armes de barri. Lluites per l'habitatge i autoorganització*

Colección: Projectiles

Traducción y edición: Milvus

Maquetación: Ester Jiménez

Diseño de colección y cubiertas: Jordi Arques

Editorial Milvus

[www.editorialmilvus.net](http://www.editorialmilvus.net)

[info@editorialmilvus.net](mailto:info@editorialmilvus.net)

Alcoi - Albaida

Primera edición: abril 2020

Segunda edición revisada: octubre 2021

Tercera edición: octubre 2022

ISBN: 978-84-948756-5-6

Depósito legal: A-123-2020

Se puede reproducir libremente sin fines comerciales.

Se debe citar los autores, la obra y los editores.

Para cualquier otro uso contactar con la editorial.

# Armas de barrio

Luchas por la vivienda  
y autoorganización

Federación Anarquista de Gran Canaria  
Sindicat de Barri del Poble Sec  
Espai Veïnal del Cabanyal



**milvus**

2020



# Editorial

Consideramos importante reconstruir y conservar las tradiciones combativas y con esa intención publicamos este libro. Además, la cuestión de la vivienda, no nos parece precisamente de segundo orden<sup>1</sup>. Para el caso que nos ocupa, existen referentes históricos que a pesar de ser lejanos en el tiempo mantienen un vínculo directo. Nos referimos a las huelgas de alquiler, como las que tuvieron lugar en 1907 en Argentina y, más especialmente, en 1931 en Barcelona<sup>2</sup>. Protagonizadas, como los conflictos actuales, por gente que sufría la miseria en su carne. Ayer como hoy, gracias a la tarea consciente de personas y colectivos, las directamente afectadas encuentran en las ideas antiautoritarias un motor para la lucha. Al superar la visión individualizada del problema y trasladarlo a una dimensión colectiva, el modelo social se tambalea y queda en tela de juicio.

Esta visión combativa, a través de su ejemplo práctico, pone sobre la mesa un planteamiento importante: la autoorganización vs. el asistencialismo. En ese aspecto resulta chocante descubrir como actores sociales, teóricamente antagónicos —desde algunos sectores de la lucha por la vivienda a la patronal inmobiliaria—, coinciden en una parte de su análisis:

se trata de un problema político. En consecuencia, le corresponde al Estado solucionarlo, ampliando el parque de vivienda pública, promoviendo el alquiler social, mejorando los servicios de asistencia, etc. De esta forma, el modelo social —desigualdad, turistificación, precariedad, etc.— queda prácticamente intacto, pendiente de estos detalles relativos a su constante reestructuración. Los ejemplos aquí recogidos, por el contrario, tienen el mérito de poner la cuestión social en el centro haciendo emerger el antagonismo subyacente. Así, el movimiento popular, plural y diverso, va dibujando una hoja de ruta común con una agenda y un programa propios, con la propia lucha como vehículo y objetivo.

Nosotros apostamos por la creación de archivos donde queden recogidas estas experiencias, que surjan y queden consignados dentro de los canales populares y autónomos, fuera de las instituciones y de los ámbitos estrictamente comerciales. Es importante mantener esta independencia porque, demasiado a menudo, desde el poder se adoptan los discursos combativos para domesticarlos, vaciarlos de contenido, volverlos inofensivos y convertirlos en espectáculo. En ese sentido, más allá de dejar constancia y difundir estas luchas, ojalá este libro contribuya al fortalecimiento de este movimiento. Por un lado, como herramienta para proyectos que empiezan o se encuentran inmersos en procesos similares; y por otra, como transmisor en el intercambio de conocimientos entre experiencias ya consolidadas. Sabemos que los colectivos que han participa-

do escribiendo los textos que siguen no son los únicos, que hay muchos más. Nosotros consideramos sus aportaciones representativas de un movimiento amplio, sin liderazgos ni vanguardias, obra de sus mismas protagonistas, que avanza por un caminar común. ¡Adelante, pues, la resistencia vecinal!





Federación Anarquista  
de Gran Canaria



La Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC) nace al calor del 15M, durante los meses de verano de 2011, en las plazas. Surge de la confluencia de distintas individualidades y colectivos formales e informales provenientes de distintos municipios de Gran Canaria. Con el tiempo se sumarían muchas simpatizantes de las asambleas populares que se hicieron anarquistas «sobre la marcha», motivadas por nuestra contundencia y negativa a permitir que asociaciones y partidos pudieran controlar el movimiento. En un principio éramos una organización que destacaba sobre todo por su combatividad y conflictividad, pero con un trabajo y discurso político-social bastante convencional dentro de los parámetros anarquistas. Nuestro primer giro de timón se produjo con el desalojo de la acampada del 15M en la plaza de San Telmo. En ella pernoctaban muchas personas sin hogar que con el desalojo perdieron su único refugio. La mayoría del movimiento ignoró este problema, pero nosotras, que ya habíamos hecho nuestros pinitos okupando, nos vimos en la necesidad de actuar. Fue así como cedimos un espacio recientemente okupado para realojar a las compañeras y como abrimos un nuevo inmueble para el mismo fin. Sin embargo, y a pesar de esta experiencia —que nos reportó la primera

detención y enjuiciamiento desde que se fundó la Federación—, nuestro anarquismo, cada vez con mayor proyección mediática —relacionada sobre todo con enfrentamientos, como boicots a los sindicatos amarillos o peleas con nazis—, seguía sin tener relación con los problemas reales de la gente. Muchas de nosotras no queríamos crecer en esa dirección, así que nos replanteamos la totalidad de nuestra estrategia.

La realidad económica y social en Canarias es la propia de nuestro enclave geográfico, pero no la de nuestro supuesto estatus político. Somos una parte, no reconocida, del llamado «Tercer Mundo». Los datos actuales no son muy distintos a los de los años de plomo de la última «crisis» (2008-2014). Seguimos siendo una de las regiones más pobres de la «Europa política», con uno de los niveles de desempleo más altos del Estado —240 mil paradas sobre una población activa de 1.300.000—; un nivel de pobreza y exclusión social del 40 % —el 60 % de las canarias afirman no poder llegar a fin de mes—; y también contamos con la infancia más pobre del Estado —el 35 % de las niñas canarias son pobres—.

Toda esta situación se ve aumentada por nuestro modelo económico, completamente terciarizado y dependiente del turismo. La turistificación en las islas es voraz e invasiva. Tenemos una población de 2.100.000 habitantes y hemos recibido, solo este 2019, a quince millones de turistas. En Canarias hemos pasado, del monocultivo agrícola impuesto durante el último cuarto del siglo XX<sup>3</sup>, al monocultivo turístico. El turismo no

solo ha degradado las condiciones laborales, debido a su fluctuación, nula repartición de la riqueza y precarización laboral, sino también las condiciones habitacionales. Con semejante volumen de población flotante, el turismo ya no se limita a residir en zonas turísticas —casi todo el sur de la isla está destinado a la población turística europea—, sino que se ha extendido hasta las zonas residenciales. Por toda la costa, ha ido empujando a la población residencial al interior de la isla, confinándola en barrios-dormitorio periféricos, cada vez más vastos y degradados. Este proceso gentrificador<sup>4</sup>, propiciado por el fenómeno del alquiler vacacional, ha provocado que en los últimos cinco años el alquiler en Las Palmas de Gran Canaria —capital de la isla—, haya subido un 45 %; teniendo uno de los alquileres más caros del Estado —la media en la provincia de Las Palmas es de 997 euros—, junto a uno de los salarios más bajos. Esto ha ocasionado un flujo constante de desahucios<sup>5</sup>.

Si en los años de la «crisis» las expulsiones se producían principalmente por impago de hipotecas, actualmente se producen, sobre todo, por impago de alquiler —somos también el territorio del Estado con más gente viviendo en régimen de arrendamiento—. Aunque cada vez, según se va deteriorando la situación alojativa, ganan más protagonismo los desahucios «en precario», relacionados con cesiones de infraviviendas y okupación desesperada.

Fue en 2012, ante un panorama no muy distinto al actual que acabamos de describir, cuando nos decidi-

mos a pasar a la acción y poner los primeros cimientos de lo que hoy llamamos «anarquismo de barrio». Para afrontar la situación social y económica de la isla decidimos diseñar una estrategia integral que abarcara, por un lado, la alimentación, expropiando tierras abandonadas y creando una red de abastecimiento de alimentos —con el proyecto Toma la Tierra y, posteriormente, Tierra y Libertad—. Por otro, el abrigo, a través de un espacio callejero de intercambio de prendas y enseres llamado Punto de Encuentro Solidario. Por último, el techo, que es la actividad donde mayor impacto popular hemos causado.

La necesidad de intervenir en vivienda no se debe únicamente al contexto económico-social que hemos explicado. La plataforma de vivienda local —primero llamada informalmente Stop Desahucios y posteriormente legalizada como Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— deja, en nuestra opinión, varios huecos sin cubrir que no pueden ignorarse dada la alarmante situación de la isla. De entrada no apoya la okupación, intenta no atender casos de desahucio por alquiler y cada vez recurre menos a los piquetes anti-desahucio cuando la estrategia legal falla. Inicialmente intentamos una coordinación con la PAH y el movimiento okupa local, pero solo accedieron los segundos y, con el tiempo, el vínculo se debilitó. Fué en ese momento cuando lanzamos nuestro Grupo de Respuesta Inmediata (GRI) contra los desahucios y empezamos a convocar las primeras asambleas públicas, de inquilinas y desahuciadas, en plazas populares de la isla.

Sobre el papel, nuestro planteamiento era sencillo: llegar a la gente con problemas de vivienda, demostrar la eficiencia de la acción directa allí donde los procesos legales habían fracasado y despertar la combatividad y la desobediencia popular contra el fenómeno de los desahucios. Para ello nos propusimos crear un estadillo de vivienda con todos los inmuebles abandonados —especialmente con aquellos que estaban en manos de entidades financieras—, susceptibles de ser tomados por la colectividad, para posteriormente, crear una red de viviendas expropiadas y socializadas. Así, en caso de no poder detener un desahucio, nadie se quedaría colgada sin un «plan b». Nos parecía que lo más difícil, el muro infranqueable con el que nos íbamos a topar y con el que el anarquismo chocaba recurrentemente desde hacía décadas, era llegar a la gente de la calle. Para nuestra sorpresa, esto fue lo más fácil.

Entendimos entonces que la gente acude a tu colectivo, a pesar de las reservas, la presión mediática y la «leyenda negra», cuando lo que compartes les interpela directamente y toca carencias materiales básicas. Intentar que la gente recurriera a nosotras dando charlas sobre la Guerra Civil o haciendo campañas de apostasía era una ilusión. La única gente que puede acercarse a ti, en esas circunstancias, es una minoría, con inquietudes previas y posiblemente con sus necesidades cubiertas. Esa fue la clave para llegar a nuestras vecinas de los barrios, a gente sin formación libertaria, pero con una urgencia real de emplear las herramientas anarquistas, no en un plano teórico o abstracto, sino

inminentemente práctico. Puede que no sean las personas que más sepan de revolución, pero sí son las que más la necesitan. Eso es en síntesis el «anarquismo de barrio».

El perfil de las personas que contactaban y siguen contactando con nosotras no ha variado: madres de familias mono-parentales sin ingresos y con una orden de desahucio inminente —el 90 % de nuestros colectivos y proyectos lo componen mujeres—; paradas de larga duración, incapaces de pagar un alquiler; migrantes, con papeles o sin ellos, a las que su situación económica o jurídica les impide acceder a una vivienda; personas en situación de indigencia prolongada; ancianas en infraviviendas incapaces de pagar la renta o los suministros; personas con enfermedades terminales que buscan un cobijo. Esta es la radiografía del grueso de nuestra sociedad.

Después de llegar a la gente, detener numerosos desahucios en varios meses y comprender que la cosa iba a más, fue cuando surgió la idea de intentar okupar edificios y tener así una bolsa de vivienda propia más numerosa de la que nos permitían las viviendas unifamiliares. Fue así como nació La Esperanza, a comienzos de 2013<sup>6</sup>. Inicialmente la idea no era crear una comunidad, solo tener viviendas disponibles para todos aquellos casos de desahucio que no lográramos paralizar. Pero con el tiempo, se fue imponiendo esta realidad como una necesidad.



Propusimos entonces lo mismo que seguimos recomendando hoy día: un modelo asambleario, horizontal, donde todas las vecinas puedan expresarse y tomar decisiones sobre los asuntos colectivos. Comisiones de trabajo encargadas de cumplir los acuerdos que lo requieran —por ejemplo: comisiones de mantenimiento, tesorería, realojo, comunicación, etc.—. Entender que el apoyo mutuo no es solo un «principio moral», sino una herramienta de supervivencia contra las agresiones del sistema. Mantener la independencia con respecto a partidos políticos y una desconfianza constante hacia las instituciones. Aspirar a la autogestión y entender que una organización como la FAGC, puede asesorar y prestar ayuda, pero no puede interferir en la gestión interna de las comunidades —sobre todo en asuntos de convivencia— que, para bien o para mal, debe ser obra de las propias vecinas. No aislarse en la comunidad y tratar de implicarse en los problemas del barrio, de otras comunidades y de otros municipios. Tratar de plantear nuevos conflictos sociales y políticos aunque ya se hayan conseguido los objetivos iniciales. Compaginar la autosuficiencia habitacional y de suministros con la soberanía alimentaria a través de huertos y redes solidarias. Generar un «espíritu» de comunidad que se compagine con el desarrollo del criterio propio y el espíritu crítico, sin renunciar a la disidencia y la individualidad. Romper con los discursos y prácticas machistas, racistas, xenófobas y homófobas. Plantear el proyecto habitacional como un primer paso para demostrar la viabilidad de la autogestión, la posibilidad de tomar y gestionar bienes de consumo —inmuebles y

suministros— por parte de las propias afectadas y abrir así la puerta a un proyecto verdaderamente revolucionario donde los barrios, cuyas viviendas abandonadas deben ser expropiadas y socializadas, puedan ser gestionados por las vecinas, tal y como los medios de producción —de ahí las tierras colectivizadas—, deben serlo por las trabajadoras. Este ha sido nuestro programa, desde lo más sencillo a lo más complejo.

Con el paso del tiempo, muchas realojadas y personas a las que habíamos ayudado a paralizar su desahucio querían integrarse en nuestro colectivo. Pero era bastante inusual que personas no anarquistas pasaran a formar parte de un colectivo anarquista. A pesar de ello, así fue durante algunos años. Sin embargo, seguía siendo problemático intentar que la gente se organizara y procediera a ayudar a otras, tal y como se les había ayudado a ellas, proponiéndoles formar parte de una federación anarquista. Creamos varias estructuras paralelas a fin de que la gente pudiera militar a través de ellas, pero no funcionaban, pues no tenían entidad propia: seguían siendo la FAGC pero con otro nombre. Fue así como, en enero de 2017, desde la FAGC, impulsamos la creación del primer sindicato de inquilinas moderno del Estado español: el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC). Una organización autónoma, donde pueden afiliarse las distintas personas con problemas de vivienda —o con ganas de intervenir en la lucha habitacional—, siempre y cuando no formen parte de ninguna estructura u

organismo que propicie los desahucios contra los que combatimos.

El balance de estos años de militancia en vivienda, iniciada por la FAGC y continuada por el SIGC, es el de más de mil personas realojadas en toda la isla; cientos de desahucios parados —más de 600—; dos huelgas de alquileres con éxito; y ocho comunidades autogestionadas tan solo en Gran Canaria.

Sin embargo, es necesario conocer los problemas a los que nos hemos enfrentado —y seguimos enfrentando a diario—, también a nivel ideológico, para tener una verdadera perspectiva y sacar todas las lecciones posibles.

En primer lugar, el tránsito de ser una federación anarquista convencional a ser una federación volcada en el llamado «anarquismo de barrio», no se produjo sin sus traumas y rupturas internas. El primer cisma estuvo relacionado con nuestros proyectos agrícolas. Un sector de la FAGC entendía la ocupación del terreno como un medio de auto-abastecernos nosotras solas y, otro sector, quería integrar a personas sin recursos y repartir parte de lo cosechado —como modo de invitación y difusión— a familias con problemas de desnutrición. En ese momento tuvo lugar la primera escisión de la FAGC.

Cuando nos volcamos con el tema de la vivienda se produjo otra fractura. Después de varios meses de militancia frenética, según nos íbamos volcando más y más

con los proyectos de vivienda, varias compañeras se desencantaron o, aunque siguiesen siendo miembros de la FAGC, ya solo era nominalmente. El trabajo era muy duro y fue recayendo sobre cada vez menos gente. Esto produjo un largo periodo de reflexión, entre mediados de 2013 y comienzos de 2014. Sucedió entonces la segunda y última escisión.

Desde ahí todo ha sido un enorme proceso de ensayo-error donde muchas de nuestras convicciones e ideas más arraigadas han sido puestas a prueba. Lo que desmotivó, con razón, a algunas de nuestras compañeras, anarquistas doctrinales que militaban por primera vez con personas no anarquistas, fue descubrir que cambiar las condiciones económicas de una persona no conlleva, necesariamente, un cambio de conducta o ideológico de la misma. Muchas personas a las que ayudábamos, según mejoraban sus condiciones de vida, se volvían más autoritarias e intolerantes con el resto, llegando a situaciones verdaderamente desagradables. Descubrir que una persona que hasta hacía poco, carecía de techo y no tenía ningún poder sobre los demás, pudiese revelarse como un agresor machista y racista solamente con recobrar sus fuerzas y cierta estabilidad, es una lección dura para quienes nos hemos dejado llevar por idealizaciones o manuales teóricos. Descubrir a personas que fingen no tener recursos, intentado acceder a casas que no necesitan por simple ánimo de lucro, o a personas verdaderamente desahuciadas, que manipulan a individuos y comunidades y que, en cuanto se recuperan, intentan alquilar el mismo inmueble socia-

lizado que cobijó a su familia tras un desahucio traumático, es una enseñanza vital que no debería aprenderse con tanto sufrimiento.

Fue con estas y otras decepciones cómo empezamos a solicitar documentos que acreditaran la situación de vulnerabilidad de las personas que contactaban con nosotras. También a exigir que las afectadas cuya edad y salud se lo permitiera, participasen en su propio realojo, abriendo su propia casa y aportando sus propios suministros, y ayudasen a otras personas en su misma situación. La necesidad de implicarse en otros realojos y paralizaciones de desahucios —la vía del conflicto—, era la mejor medicina para acabar con el asistencialismo; y al mismo tiempo, con un mal recurrente de muchas comunidades: el hermetismo y la indiferencia. Hemos llegado a la conclusión de que, aproximadamente, el 10 % de las personas a las que asesoramos o ayudamos sigue colaborando con el proyecto. El resto, tarde o temprano se desvincula. Aunque pueda parecer un porcentaje desalentador, la realidad es que es el mismo porcentaje real de militancia en colectivos politizados y sindicatos laborales. Si se quiere aumentar el número de participación no queda otra que llegar a más gente. Aunque en algunas comunidades, sobre todo las más pequeñas o en las que hay lazos previos, el porcentaje de implicación es mucho más alto, hay comunidades donde solo entre un 10 % y un 20 % de las vecinas se implican en la gestión del día a día. Nos hemos dado cuenta de que es la tan ansiada estabilidad una de las causas que genera esto, y que son los con-

flictos con el sistema —para garantizar la propia continuidad, proponer nuevas demandas o participar en las reivindicaciones, tanto de otras comunidades como de afectadas individuales—, los que más rompen esta inercia. El hermetismo, el aislamiento y el ensimismamiento tienen un componente disolvente mucho mayor de lo que se cree.

Otro aspecto que siempre nos pareció importante promocionar era el sentido de comunidad, la idea de lo común. Pensábamos que era el individualismo la causa de la desafección, falta de empatía y solidaridad entre algunas vecinas. Pero el paso del tiempo, la experiencia y nuestro análisis resultante, nos han hecho ampliar las conclusiones. Un compa de formación anarcoindividualista nos dio la clave: solemos pensar que la mayoría de la gente es insensible e insolidaria porque son muy «individualistas». Pero la realidad es que la mayoría de la gente está obligada a desarrollar una individualidad muy limitada y plana, forzada a comportarse, pensar, e incluso sentir, como la mayoría; y este sentido de la mayoría está hoy construido por el capitalismo. El capitalismo no quiere que la gente desarrolle una individualidad fuerte y autónoma; lo que quiere es que la gente renuncie a cuestionarse el actual estado de cosas, que acepte la indiferencia ante los demás como un valor generalizado y haga propios todos los prejuicios racistas y machistas —que no resistirían un pensamiento crítico personalizado—, que garantizan el sojuzgamiento y la lógica de la estructura competitiva. No es tanto «piensa en ti» como «no pienses en las demás». En las comuni-

dades nos hemos dado muchas veces cuenta de esto y hemos asistido a asambleas, completamente coherentes con el modelo libertario en su funcionamiento, donde se han tomado decisiones autoritarias e insolidarias por culpa de un sentido de la discrepancia débil, un seguidismo ciego y un deseo de conducirse por la inercia de la mayoría. Desentenderse de nuestras iguales no se hace tanto por individualismo como por gregarismo, por una necesidad de no significarse y perpetuar la insolidaridad colectiva. En ese sentido, nuestros proyectos han sido más sólidos cuanto más hemos podido fortalecer la discrepancia, el espíritu crítico, la sensibilidad individual y el pensamiento propio. El problema, quizás, es que solemos confundir el egoísmo crudo, que es pensar en una misma, con el individualismo, que es pensar por una misma.

Otra conclusión a la que llegamos es a la de renunciar a crear una «comunidad perfecta». Es imposible, injusto para las vecinas y agotador para todas las implicadas. Durante un período, la FAGC trató de influir en La Esperanza, llegando a volcarse completamente en la búsqueda de una comunidad que lograra desterrar los tics jerárquicos, los prejuicios, los mecanismos autoritarios cotidianos, los conflictos violentos, etc. Con el paso del tiempo asumimos que es irreal exigirle a una comunidad humana, solo por el hecho de ser autogestionada, que sea exponencialmente mejor que cualquier otro barrio o pueblo de nuestro entorno, cuando el material humano es el mismo, por mucho que intenten subvertirse los valores. No es posible construir un

oasis libertario perfecto rodeadas de un desierto capitalista. No se le puede reclamar a la gente que olvide en unos meses o años lo que han adquirido durante toda una vida. Es un proceso arduo que deben dirigir, con mejores o peores resultados, con mayor o menor rapidez, las propias afectadas. La FAGC tardó en comprenderlo y durante mucho tiempo agotó recursos y esfuerzos en intentar revertir de forma inmediata, una situación que realmente puede durar décadas o semanas, dependiendo de la predisposición de las personas y de sus circunstancias previas. El SIGC ha aprendido de la mala experiencia inicial de la FAGC y actualmente, tal y como hiciera la propia FAGC desde 2015, no se involucra en la gestión interna de las comunidades. Menos aún en problemas de convivencia entre vecinas, limitándose a asesorar en cuestiones legales, diseñar estrategias anti-desahucios junto a las comunidades, y ayudar materialmente cuando la situación lo requiere. La autogestión, para bien o para mal, requiere estar dispuestas a asumir cierto margen de vértigo.



Sindicat de Barri  
del Poble Sec



El proyecto del Sindicat de Barri como tal nace, aproximadamente, hace poco más de cinco años (el 2015), en torno al Ateneu Cooperatiu La Base, en el barrio de Poble-sec de Barcelona. Después de haber conseguido abrir un espacio propio en el barrio, donde poco a poco íbamos arraigando, un pequeño grupo de personas sentimos la necesidad de ir un paso más allá y enfrentarnos frente a frente con los problemas que vivíamos en el vecindario. La intención inicial era crear un espacio militante pero a la vez abierto. Un lugar donde poder dar cuerpo a las ideas de justicia social, comunidad y acción directa que habíamos debatido una y otra vez a lo largo de nuestra trayectoria. Recorriendo nuestro propio hilo histórico nos dábamos cuenta que habíamos vivido diferentes movilizaciones importantes que nos llevaban siempre a la misma conclusión: debíamos organizarnos y pasar de campañas abstractas a casos concretos. Desde las luchas contra el Plan Bolonia en las universidades, pasando por el movimiento okupa de Barcelona —siempre en declive pero nunca vencido— y llegando a las plazas del 15M y de estas a los barrios, acumulábamos unos conocimientos y unas prácticas comunes que, con la crisis, se habían revelado más

necesarias que nunca para transformar la sociedad. «Vivimos en un momento en el que hay que volver a organizarse para defendernos de la explotación y la reconfiguración capitalista de nuestros entornos. Las viviendas, los barrios e incluso los territorios se han transformado en espacios al servicio del consumo y de la propiedad de grandes empresas privadas. En este proceso, nuestra vida resulta cada vez más individualizada, hasta el punto que desconocemos a las personas y las necesidades de quienes viven a nuestro alrededor».<sup>7</sup>

En este primer momento definimos nuestra esencia —que persiste hasta ahora— y unimos, en una sola entidad, las dos grandes tradiciones que recorren los movimientos obrero y social de la ciudad. Por un lado, el sindicalismo combativo de tradición obrera: una organización horizontal que pretende encontrar soluciones a los problemas de sus miembros desde la acción de sus propios miembros, o sea de forma no delegada.<sup>8</sup> Dicho de otro modo: mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas sin esperar que ninguna institución o empresa lo hiciera por nosotras, a la vez que nos hacíamos más conscientes a cada paso que, si había alguna mejora, sería a través de la lucha contra estas. Por otro lado, el barrio: la suma de una extensión territorial concreta y de las redes de relaciones humanas que se desarrollan a lo largo del tiempo. El lugar donde la generación de nuestros padres había conseguido las victorias más importantes de su época. El conjunto de edificios, plazas y calles

donde vivíamos nuestro día a día, y que se veía amenazado por el turismo, el aumento de los alquileres y la precariedad.

Así, tras un periodo de muchos debates internos sobre como dar vida a la unión de estos dos grandes conceptos cargados de historia, llegó el momento de pisar el asfalto. Y lo hicimos con la prioridad puesta en la vivienda y los suministros, puesto que habíamos detectado que estas eran las necesidades más urgentes en nuestro entorno. Para más adelante dejábamos las cuestiones laborales, de alimentación y cuidados. La idea era sencilla: llenar de carteles el barrio con preguntas como: «¿te echan de casa?»; «¿te han cortado la luz por no poder pagar?»; junto a un teléfono de contacto y un correo para que la gente afectada por las problemáticas se acercara a pedir ayuda, rompiendo el aislamiento individual. En una segunda etapa queríamos construir, con las distintas afectadas, un grupo de asesoramiento colectivo basado en el apoyo mutuo. Y aunque es cierto que llegaron algunos casos aislados a los que se dio ayuda técnica y se consiguió una pequeña victoria —un contrato de masovería a raíz de una okupación—, el resultado no fue el esperado. No llegaron suficientes personas dispuestas a luchar hasta el final, o bien no encontraron en el grupo inicial confianza y apoyo suficientes para hacerlo. El caso es que este primer Sindicat de Barri entró en fase de hibernación y no despertó de nuevo hasta pasados unos meses.

Mientras tanto, en el contexto metropolitano de Barcelona, el problema de la vivienda —simple y llanamente, que los propietarios nos echan de casa para ganar más dinero, alentados y protegidos por el Estado— se agravaba con cada desahucio, con cada ley del gobierno, con cada titular de prensa. Después de la crisis económica de 2008-2009, el modelo de vivienda del Estado español —basado en la propiedad mediante hipoteca— y todos los actores implicados, habían saltado por los aires. El sistema estaba en demolición pero esto no garantizaba que los poderosos perdieran poder y los de abajo ganáramos ningún derecho. De hecho, estaba a punto de pasar justo lo contrario en una sucesión acelerada de acontecimientos que resumimos en tres actos:

#### 1<sup>er</sup> Acto: «Salvar los (in)muebles»

Caracterizado por la socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios, a través de la reestructuración del sistema de cajas y bancos y la eliminación de las ayudas a la vivienda; paralización de las promociones de protección oficial y abandono de obras inmobiliarias faraónicas a medio construir; centenares de miles de ejecuciones hipotecarias; y gente en la calle condenada a pagar la deuda hasta el último céntimo. Entran en escena los bancos malos y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB). Frente a este panorama, se funda la PAH.

## 2º Acto: «A río revuelto...»

Venta de activos tóxicos a fondos de inversión buitres a un precio irrisorio; reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos —el plazo mínimo de duración del contrato baja de cinco a tres años—; creación de la figura de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI); obtención de la nacionalidad española a cambio de comprar inmuebles por valor de medio millón de euros; compraventa de edificios por parte de grupos de inversión para volverlos a vender al cabo de seis meses; y manipulación de los precios del alquiler fruto de la suma de portales inmobiliarios virtuales en connivencia con las inmobiliarias tradicionales. Por primera vez, los casos de desahucios por impago de alquiler superan a los causados por impago de hipoteca. Irrumpe Airbnb; se inicia la creación de pisos colmena<sup>9</sup>; se intensifican el *mobbing*, los cortes de suministros, los suicidios con la comitiva judicial a punto de ejecutar un desahucio, etc.; y aparece Desokupa. Frente a este panorama, nace el Sindicat de Barri del Poble Sec.

## 3er Acto: «El 15M de la vivienda»

Diferenciamos este periodo para constatar que a nuestro lado del campo también pasaban cosas. A pesar de que lo ubicamos en último lugar, cronológicamente se inicia a lo largo del 1er Acto con la creación de la PAH, y se generaliza a partir del 2º Acto con la aparición de multitud de actores más: Obra Social BCN, Edifici 15o, #EfecteCanVies, Sindicat de Llogaters y la creación

de más de diez grupos de vivienda a lo largo de los diferentes barrios de la ciudad —y muchos otros en toda Cataluña—; ayuntamientos del «cambio»; desalojo de las grandes okupaciones del centro de Barcelona; manifestaciones contra la expulsión de las vecinas, el turismo masivo y los cruceros; también se empiezan a parar desahucios de forma generalizada, algunos de hasta quinto y sexto lanzamiento.

Volvemos al grupo que habíamos llevado a cabo el primer intento fallido de arrancar el proyecto del Sindicat de Barri. Un compañero y amigo nos dejaba un 14 de febrero de 2016. Atravesamos el momento de mayor introspección desde el primer impulso de salir hacia afuera. Cada uno de los integrantes nos replanteamos de arriba abajo nuestras vidas, el sentido de nuestra lucha, qué es lo que nos hace levantar cada mañana y quién es el enemigo que nos asedia interna y externamente. Afilamos nuestro pensamiento y nuestra voluntad mientras buscamos una salida al laberinto. La herida todavía está abierta pero recuperamos fuerzas al calor de los cuerpos y los cuidados de unos y otros. Queremos continuar. Queremos volver a empezar. Nos plantamos en septiembre, en un inicio de curso, que siempre es un buen punto de partida para nuevos proyectos y esperanzas.

En este segundo Sindicat de Barri partimos prácticamente de cero, con un planteamiento mucho más estratégico —en sentido político— respecto al barrio. Hay algunas personas que ya han iniciado otros caminos,



pero sobre todo llega gente militante con energías y un sentido práctico urgente. Trazamos un plan para los primeros tres meses, consistente en elaborar un programa político —una base reivindicativa sólida— desde el reducido grupo militante del Sindicat de Barri, formado por entre ocho y diez personas. El objetivo es exponerlo a los principales actores del barrio para hacerlos conscientes del problema de la vivienda. Decidimos volcarnos en esta cuestión ya que si nos echaban de casa y del barrio ya no tenía sentido organizar el resto de luchas: primero teníamos que conseguir quedarnos. A este programa lo llamamos «Los cinco puntos»:

1. Limitación de los precios de alquiler.
2. Renovación automática de los contratos de alquiler.
3. Ni un desalojo más.
4. Reducción drástica de los alojamientos turísticos.
5. La vivienda no puede ser un negocio.

Cerrábamos con una declaración de intenciones a modo de advertencia: «Exigimos, a inmobiliarias y propietarios: dejar de especular con los precios de los alquileres, empezando por revertir el incremento de los últimos tiempos; a las instituciones: parar de forma inmediata los desahucios y evitar el desplazamiento de la población mediante realojamientos dentro del mismo barrio, y aumentar el parque de vivienda social y cooperativo».

Con esta «carta reivindicativa» íbamos a buscar y a sumar el máximo de entidades y colectivos del barrio.

A la vez que hacíamos evidente el problema, despertábamos la inquietud en los vecinos y vecinas respecto a la vivienda y le dábamos un marcado carácter colectivo y político. Dedicamos aquel otoño a todo el proceso de redacción del texto y a su legitimación por parte del conjunto de fuerzas del barrio. Estábamos creando un programa a través del cual unirnos a otras entidades, pero sin comprometernos en la acción —unidad de programa y que después cada cual lo defendiera por las vías que le parecieran legítimas—. Al cabo de pocas semanas ya teníamos la firma de las organizaciones más importantes<sup>10</sup>.

Este conjunto de entidades y colectivos son el tejido vivo del barrio, desde grupos de la economía social y solidaria hasta librerías alternativas, pasando por grupos feministas, de cultura popular y fiesta mayor, así como otras religiosas o del ámbito educativo. En todas ellas las personas que formaban parte vivían en primera persona el problema de la vivienda. Si el goteo de gente que se marchaba del barrio continuaba, las mismas entidades estaban destinadas a desaparecer o a no encontrar relevo. Lógicamente, sintieron el imperativo de sumarse al paraguas-manifiesto que les proponíamos.

Este proceso culminó con el Encuentro Vecinal por la Vivienda en el Poble-sec, donde se aprobó el texto definitivo tras algunas enmiendas. A continuación tuvo lugar un pasacalle para visitar las inmobiliarias «de barrio»<sup>11</sup> y exigirles que se unieran a nosotros o se prepararan para tenernos enfrente. Era 2017 y

el barrio había tomado conciencia de la situación, a la vez que se hacía más evidente la expulsión del vecindario y su sustitución por turistas, *hipsters* y especuladores encorbatados. En ese preciso momento, despuntando la primavera, hicimos nuestra primera aparición pública en las plazas y calles a través de una campaña masiva. Esta consistía en encartelar intensivamente con «Los cinco puntos» las esquinas más concurridas, comercios y portales, además de hacer paradas informativas, explicando el Sindicat, a la salida de las escuelas.

Aprovechando el buen tiempo en la etapa final del curso, nos reunimos en asambleas vecinales los últimos domingos de mes, a las que acudían personas con un abanico de problemas bastante considerable: desde gente que convive y malvive con apartamentos turísticos en su escalera, hasta aquellas que desahuciarán al día siguiente por no haber pagado un mes de alquiler y a las que la inmobiliaria no les acepta el dinero. Con todo el trabajo de meses y meses, hicimos surgir muchas voces que hasta entonces afrontaban su expulsión desde la soledad de su casa. Compartimos a modo ilustrativo algunos ejemplos extraídos de actas de la asamblea:

«Silvina. 15 años viviendo en un piso del barrio. Su bloque ha pasado por 10 propiedades diferentes. La última propiedad es un inversor israelí que quiere especular con el edificio. Tiene una situación precaria y ha pedido varias veces pagar un alquiler social. Ahora le acosan psicológicamente para que abandone el piso, le pidieron un desalojo exprés pero fue a juicio y lo ganó.

Pero ahora, se le acaba el contrato y la propiedad no se lo renovará. Se queda sin casa y con una hija a su cargo».

«Enric y Maribel. Dos hermanos que vivían con su madre. El contrato del piso que compartían estaba a nombre de la madre, ella muere y al cabo de 15 días les llega un burofax asegurando que tienen que abandonar la vivienda en 15 días. Llevan viviendo 60 años».

Ahora se sienten escuchadas por otras vecinas; nos reconocemos las unas a las otras en el mismo bando y dejamos de estar aisladas:

«Somos muchas las que no llegamos a final de mes. Sentimos vergüenza y culpa por no poder pagar. No tener dinero está mal visto en la sociedad en que vivimos. Esto hace que no expliquemos la situación que vivimos, lo ocultamos hasta que el desahucio se precipita y ya no podemos hacer nada. Por lo tanto es imprescindible compartir con nuestra gente más próxima, amigos, vecinos y familiares, nuestras dificultades. ¡No escondamos más este problema que destruye tantos hogares del barrio! ¡Si te encuentras en alguno de estos casos, hagámosle frente juntas, no estás sola!».

En estos primeros momentos el asesoramiento colectivo era muy precario, puesto que nos faltaban —y nos siguen faltando— herramientas legales y conocimientos sólidos sobre cómo funciona el mecanismo institucional mediante el cual, se lleva a cabo el desarraigo de los vecinos de sus casas. Hasta que no nos

levantamos no sentimos las cadenas, pero cuando tratamos de romperlas es cuando apreciamos de qué metal están hechas y quien las ha forjado. Despacio, a través de una lucha concreta, se nos hace evidente como el poder convertido en sistema se protege a sí mismo; como la propiedad privada se convierte en privilegio. Tener un título de propiedad pasa por encima de las vidas de la gente, de sus vínculos, de sus necesidades; significa tener toda una maquinaria legal, judicial y de legitimidad social, a disposición permanente.

Ya en las postrimerías del curso 2016-2017, habíamos acumulado suficiente información sobre la situación del barrio para realizar una radiografía más cuidadosa: «La situación de la vivienda se ha convertido en una pesadilla para la gente que vivimos en el Poble Sec. Durante los últimos dos años los precios del alquiler han subido más del 20 %, haciendo que la mayoría de los vecinos y vecinas dediquemos la mayor parte de nuestros ingresos a poder pagarlo. Cuando terminan los nuevos contratos de tres años, los propietarios y las agencias inmobiliarias te pueden pedir el precio que quieran. Quien no lo puede pagar va directamente a la calle. Y si necesitas buscar otro piso de alquiler, tendrás que pagar unos cuantos miles de euros de depósito al propietario y de honorarios a la agencia inmobiliaria de turno. Esta situación no ha caído del cielo sino que tiene nombres y apellidos». Los datos eran agobiantes y daban una base sólida a nuestros argumentos: «el 93 % de los desahucios son por impago de alquiler; 8 desahucios diarios en Barcelona; hasta el 40 % de aumento del

precio del alquiler en 3 años; 622 € el precio medio de un piso de alquiler en Poble Sec en 2017; una persona al día se ha marchado del barrio desde el 2012; y existen 348 viviendas vacías en el barrio, la mayor parte de Bankia y BBVA».<sup>12</sup>

También a finales de aquel curso nos llega el primer caso de un bloque de pisos entero: Nou de la Rambla 128. La propiedad quiere vender el bloque y empieza a enseñar los pisos a posibles compradores. Corre la voz de que los nuevos propietarios quieren extinguir los contratos en vigor y no renovarlos para echar a todo el mundo, reformar el bloque, y alquilarlo a otra gente de mayor poder adquisitivo. Los vecinos deciden recurrir al Sindicat para tratar de defenderse ante lo que parece inevitable. Desde el Sindicat apenas estamos empezando a investigar propietarios y como funciona la dinámica de las propiedades verticales, mucho más jugosas para los inversores. Generalmente, los grandes fondos buscan fincas enteras de propiedad vertical que puedan comprar a un precio bajo, para después revender —sin haber hecho ninguna mejora—, o reformar para volver a alquilar aumentando el precio. Este dependerá de si en el bloque hay contratos de renta antigua, contratos de tres años u okupas. Cuanto más fácil sea echar a la gente que vive más caro será el precio; por el contrario, si por la situación legal de los contratos no es posible echarlos a corto plazo, esto hace bajar la rentabilidad. El único motivo de los nuevos compradores para hacerse con el edificio es el de obtener el máximo beneficio, buscando renovar los

inquilinos para aumentar los precios, aprovechando el momento alcista del mercado y la desprotección de los arrendatarios. Todo barnizado con alguna pequeña reforma para darle otra cara a los pisos: pintar, poner parqué, ventanas de aluminio, plato de ducha, o cocina con barra americana.

El caso de Nou de la Rambla 128 nos acerca a una nueva realidad: la del vecindario dentro de la escalera. Realizamos una reunión con las vecinas del bloque para conocer cuál es la situación y tratar de buscar caminos para resistir. De todas las inquilinas de la finca, acuden a la cita algo más de la mitad. Esto ya nos da a entender que tenemos unas fuerzas limitadas y que hay gente que no acude, bien porque no piensa que se pueda hacer nada, bien porque ya negocia de forma individual con la propiedad; o simplemente porque no le preocupa lo que pueda pasar e irá a otro lado si llega el momento de salir. Aun así contamos con gente que siente la injusticia de la situación y está dispuesta a ir en serio. También hay gente que está de acuerdo con que no es justo lo que ocurre pero no puede o no quiere tener un papel participativo. Nuestra proclama es que no hay soluciones individuales al problema, que se tiene que afrontar como colectivo de vecinas, todas juntas con la misma posición frente a la propiedad.

Venimos de un barrio trabajador donde la gente se conoce y ha compartido familia, amigos y trabajo. A la vez, esta realidad pretérita cada vez es más lejana y vamos hacia un escenario de individuos aislados dentro de sus pisos. La tarea más importante será

restablecer la confianza y los vínculos, retejer un poco el sentimiento de pertenencia a la comunidad y al barrio. La realidad está ante nosotros y en la misma reunión emergen malestares fruto de la convivencia entre vecinas: que si la del cuarto hace mucho ruido, que el del primero no recoge la mierda de su perro, que nadie se encarga de cambiar la bombilla fundida de la escalera, etc. Una vez más la gente necesita hablar, expresarse, tener una voz y ser escuchada. Y aunque no es el motivo de la reunión, de alguna manera se tienen que acoger y gestionar estas voces.

Acordamos, pues, dar batalla y que el Sindicat sea el paraguas bajo el cual se desarrolle la lucha del bloque. Haremos dos acciones sencillas: poner pancartas en todas las ventanas y balcones de los vecinos que se oponen a la compraventa y hacer una rueda de prensa donde hable gente del Sindicat y vecinas de la finca. Paralelamente, a demanda del Sindicat, el Distrito realiza una inspección técnica en la finca y encuentra algunas irregularidades que imposibilitan cualquier operación. De repente los movimientos de la propiedad se paralizan, se renuevan algunos contratos y llega el verano. A la vuelta la noticia es definitiva: la propiedad no venderá la finca. Conseguimos la primera victoria significativa y lo hacemos casi únicamente por el hecho de habernos levantado y haber hecho ruido. Parece que nos tienen más miedo ellos a nosotros que al revés.

Inauguramos el curso 2017-2018 con esta victoria que resuena por todo el barrio. Aparecemos en medios



locales como el periódico Zona Sec y otros generalistas como los diarios Ara o El Periódico. El Sindicat de Barri del Poble Sec se convierte en un actor reconocido en el barrio y la ciudad, y aportamos nuestra visión en reportajes y debates televisivos de La Sexta o betevé. Los medios de comunicación necesitan una voz que explique lo que ocurre con la vivienda. Hasta entonces solo se hablaba de alzas de precios, inversores e inmobiliarias, pero de repente, ahora hay gente que ha dicho basta y que se niega a que la echen de su casa. Se han fijado en nosotros, somos los protagonistas, una cara visible y una respuesta al ansia de noticias del mundo periodístico. Lo cierto es que no iniciamos el debate, recurrente dentro de los movimientos sociales, de si teníamos que hablar o no con la prensa —burguesa—. Y no nos lo hemos planteado en todos estos años.

Necesitábamos dar a conocer las situaciones de precariedad del barrio, como estábamos siendo expulsados silenciosamente, como había gente que consideraba todo aquello injusto y había dicho basta. Así que aprovechamos cada ocasión para dar la cara y meter nuestra cuña. Al principio sin un argumentario muy claro y sin portavoces. Cada declaración a cámara o ante micrófono, era un reto para muchas personas que nunca habían sido enfocadas. Poco a poco fuimos marcando un discurso propio, aprendiendo a obviar las preguntas de los periodistas y responder aquello que nosotros queríamos transmitir. Poniendo en el centro del plano a las personas del Sindicat, explicando de pri-

mera mano como malvivían en pisos asediados por el *mobbing*, como les afectaba el aumento del alquiler o la pobreza energética. Vernos, escucharnos y leernos en los medios nos hizo tomar conciencia sobre la importancia de incidir en el debate público, en la batalla de las ideas, en los discursos que llegan a la gente que está en su casa absorbiendo consignas que, más o menos conscientemente, va reproduciendo y marcan su día a día. Esto no nos hace estar todo el día persiguiendo o atendiendo periodistas, ni nos ilusionamos con que siempre transmitirán aquello que queremos. Simplemente es una parte más de nuestra lucha. Hoy en día, que vivimos más que nunca en una realidad mediatizada, con unos políticos, empresarios y policías muy cuidadosos de no transmitir una mala imagen, el hecho de aprovechar estos altavoces para que se muevan cosas en la opinión pública, nos parece una oportunidad que hay que aprovechar. Especialmente en el momento específico de los desahucios, qué es cuando tratamos de reunir más periodistas, más focos y más cámaras, para entorpecer la acción de la policía y limitar su ejercicio de la violencia y la represión.

Otro aspecto destacable del curso es la relación con las instituciones locales. Barcelona En Comú gobierna en el Ayuntamiento de la ciudad y destacados activistas de la lucha por la vivienda forman parte de este, como la misma alcaldesa Ada Colau, o Gala Pin, regidora del distrito de Ciutat Vella, limítrofe con nuestro barrio. Se promueve la mediación con los propietarios y mejora la asistencia a los desahucios con la figura del

Servicio de Intervención en la Pérdida de Vivienda y Empleo (SIPHO)<sup>13</sup>. También un socio de La Base participa en el gobierno municipal en un segundo plano, retirándose en contrapartida de los espacios de decisión del ateneo. Uno de los criterios que la alcaldía se había propuesto como prioridad era generar una relación fluida con los barrios y con las entidades que las habitan. Tratar de escuchar las necesidades que expresan estas entidades y colectivos, a veces en forma de demanda, a veces en forma de reivindicación, para incluirlas de alguna manera en el programa de gobierno. En el Poble-sec, esta relación era especialmente intensa dado que era uno de los barrios donde había habido un mayor número de votantes de la candidatura de los comunes. Con este panorama era cuestión de días que llamaran a nuestra puerta, por lo tanto, cuando nos llamaron para encontrarnos no nos sorprendimos.

Desde el Sindicat de Barri nos planteamos el debate acerca de entrar a dialogar o no con el Ayuntamiento, y en su defecto, con el Distrito de Sants-Montjuïc, donde se incluye el barrio de Poble-sec. Apostamos por una táctica práctica y no-dogmática. Partimos de la predisposición a dialogar con quién haga falta e ir donde sea para tratar de cambiar la situación, mientras somos plenamente conscientes que solo desde nuestra acción diaria esto será posible. En una primera reunión hablamos con un miembro del Distrito, que nos expone sus planes para revertir la situación en el barrio respecto a la crisis de la vivienda: que el Ayuntamiento compre solares al

mercado privado para después cederlos en régimen de cooperativa; declarar el barrio zona de tanteo y retracto —con lo cual el Ayuntamiento tendría opción de compra y última palabra en cualquier operación inmobiliaria—; construir pisos de alquiler social en el barrio, etc. También otras promesas como abrir una Oficina de Vivienda de Poble-sec/Sant Antoni —actualmente seguimos teniéndonos que desplazar más de 45 minutos a pie hasta la oficina que tenemos asignada, cuando se trata de un lugar vital a la hora de obtener ayudas a la vivienda, alquileres sociales, asesoramiento legal, etc.—. También comprar y hacer viviendas en las Tres Xemeneies, lugar emblemático del barrio donde tuvo lugar La Huelga de La Canadiense y que, después de ser central eléctrica alojando las oficinas de Endesa, quedó abandonado durante años.

Cómo podéis imaginar, pocos de estos planes y promesas han sido llevados a cabo casi cuatro años después. Durante aquel curso asistimos a varias reuniones donde nos iban actualizando sobre el estado de estos proyectos, mientras nosotros seguíamos haciendo presión para que se materializasen cuanto antes mejor. Exceptuando la primera reunión —por la novedad que representaba—, del resto salimos frustrados por la evidencia de que no llevaban a ningún lado. Un lodazal burocrático se revolvía delante de nosotros, pero no íbamos a permitir que marcasen nuestra agenda desde fuera. El mejor antídoto fue no crearnos expectativas. Aquellas mesas eran una pantalla más que había que jugar para encontrar nuestro propio camino. Nos de-

tendremos en un caso ilustrativo, la única ocasión en qué sacamos algo de estas reuniones, que a la vez nos servirá de ejemplo de las situaciones que nos hemos encontrado y como hemos ido articulando nuestra lucha:

«Feliciano, un vecino del Poble-sec asediado por el *mobbing* inmobiliario:

El número 12 de la calle Murillo es un bloque de pisos que, lentamente, ha ido perdiendo la gente que antes le daba vida. Decenas de puntales atraviesan la escalera del edificio, una nube de polvo invade diariamente el espacio y el ruido persistente de las obras entra en todos los pisos. Un andamio colocado, supuestamente para reformar la fachada, ha impedido ver la luz del sol durante meses y, al retirarlo, se ha descubierto que no se había arreglado nada. Todo ello ha hecho la vida imposible a las más de 20 familias que vivían en el bloque que, poco a poco, han ido marchándose vaciando el edificio. Prácticamente solo queda Feliciano y sus dos hijos.

¿Y por qué tantas obras? Pues para hacer apartamentos de lujo y multiplicar el precio de la finca. El objetivo: sacar rentabilidad económica en un edificio que ha pasado por varias manos en los últimos años, entre ellas las de Norvet, un fondo de inversión inmobiliario que ha aterrizado en Barcelona para participar en el reparto del pastel de la vivienda. Pero no todo el mundo está invitado a esta fiesta.

En este punto se encuentra Feliciano, vecino del barrio desde hace más de 15 años. Feliciano además

de sufrir las obras de unos pisos que él no disfrutará, ha sido asediado continuamente por el administrador de la finca, Grande Urbe. Con un contrato de alquiler vigente de cinco años no se esperaba que le ofrecieran 5.000€ para marcharse antes de la finalización de este. Se ve que sale más a cuenta pagar a alguien para que se marche unos pocos meses antes y, así, no encontrar oposición de los vecinos. Eso debería pensar la propiedad, y cuando se enteró de que Feliciano declinaba la oferta optó por aumentarle el alquiler —de forma ilegal, pues se encontraba con contrato vigente— a una cantidad que sabían que no podría pagar. Él decidió no caer en el chantaje y seguir pagando la cantidad establecida por el contrato, pero la propiedad ya no le aceptaba el dinero. Técnicamente había dejado de pagar, aunque él nunca había querido dejar de hacerlo, y en esta rendija lo denunciaron por impago. El proceso de desahucio había empezado y la maquinaria judicial, imparable, solo se ha retardado a golpe de recursos y lucha vecinal.

Después de parar el primer desahucio con la ayuda de vecinos y vecinas organizadas con el Sindicat de Barri del Poble Sec, ahora Feliciano y su familia se encuentran ante la amenaza del segundo desahucio. La fecha prevista es para el próximo 24 de enero a las 9h de la mañana. Antes de este día la propiedad, Norvet SL, da una última ‘oportunidad’. Le ofrecen 18.000 € si se marcha antes de la fecha de desahucio. ¡Tienen prisa por empezar a ganar dinero pero no se lo pondremos tan fácil!».<sup>14</sup>

El caso de Feliciano era paradigmático pues concentraba toda la perversidad de los fondos de inversión y hasta donde eran capaces de llegar para echar a alguien de su casa. Despreciaban las condiciones de vida de una persona hasta el extremo de obligarla a vivir entre ruinas sin ofrecerle ninguna alternativa; el dinero antepuesto a toda humanidad. La rabia atravesó nuestro cuerpo al conocer de primera mano como vivía Feliciano con sus dos hijos adolescentes: en su piso de poco más de 40 metros cuadrados, todas las ventanas habían quedado inutilizadas por las obras, un balcón se encontraba en peligro de desprendimiento y una habitación estaba perforada —literalmente— por el techo y por el suelo en diferentes puntos, resultando inhabitable. Se realizaban cortes constantes en el suministro de agua y luz y los obreros, a orden de la propiedad, habían arrancado el buzón, el interfono y la antena de televisión. Enfrente teníamos a un gigante: Norvet. Un fondo con capital israelí aterrizado en Barcelona con la intención de «recuperar el magnífico patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad» (todo por Barcelona pero sin la gente de Barcelona). Poner lado a lado las imágenes de cómo vivía Feliciano con una simulación de AutoCAD de cómo quedarían los pisos de lujo proyectados por la empresa era, sencillamente, repugnante.

Con diferentes edificios proyectados en nuestro barrio —y otros por toda la ciudad— pusimos las fichas encima del tablero: había llegado la hora de enfrentarnos a brazo partido con lo que contábamos y ganar. A lo largo de prácticamente dos años de

conflicto desplegamos nuestro ingenio y capacidad de organización para presionar a la propiedad y al Ayuntamiento, luchando para que Feliciano y su familia pudieran quedarse en el barrio. Paralizamos durante toda una mañana las obras de otro edificio que Norvet tenía en el mismo barrio; ocupamos su sede central durante cinco horas, forzando una intervención de mediación por parte de los Mossos; realizamos visitas constantes a locales comerciales de la empresa; lanzamos una campaña investigando a fondo el entramado empresarial, creando una web, realizando llamadas telefónicas, haciendo pegatinas con el lema «BCN vs. Norvet», carteles, etc. También ocupamos la Oficina de Servicios Sociales del barrio exigiendo una reunión para tratar de encontrar otro piso —nos ofrecieron, como alternativa, una vida entre habitaciones de hostales y pensiones—. Con toda la información de los efectos del *mobbing* y con fotografías detalladas, generamos un dossier de prensa denunciando la situación; interpusimos una querrela ante el juzgado; nos coordinamos con la PAH para exigir ante el Ayuntamiento la expropiación de los pisos y la creación de alquileres sociales; y también detuvimos dos desahucios en la puerta.

El hecho de que los edificios del fondo de inversión estuvieran repartidos por diferentes barrios, propició que conociésemos a otros grupos de vivienda y nos coordinásemos con ellos para realizar un asedio constante a la empresa. Con la Oficina d’Habitatge Popular de Gràcia planeamos acciones simultáneas e hi-



timos crecer la imagen de que la ciudad se oponía a Norvet —y a otros fondos de inversión—. La gente de Gracia conocía bien su cara menos amable pues, a raíz de una okupación, la empresa israelí no dudó al aplicar la fuerza a través del brazo militar de Desokupa.

Abrimos paréntesis para hablar brevemente de esta agencia de esbirros a sueldo de la patronal y la burguesía. Tirando del hilo tejimos una red alrededor de los pisos donde había actuado Desokupa, bien para impedir okupaciones, bien para echar a la gente de su casa. Junto con otros grupos y afectadas se recopiló información sobre su *modus operandi*, se creó un protocolo de actuación y se dio a conocer a la prensa como actuaban y quién eran sus agentes, relacionados en gran medida con la extrema derecha. También se detectaron varios casos de uso de armas blancas y de connivencia con la policía.

Volviendo al caso y ya para cerrar, este finalmente se resolvió con la intermediación del Ayuntamiento. Dado que se había vuelto mediático por todo el ruido que habíamos hecho y paradigmático de cómo actuaban los fondos de inversión, para el Ayuntamiento fue muy fácil posicionarse. Detuvieron las obras del edificio de la calle Murillo 12, pues el permiso se había pedido piso por piso como si de obras menores se tratase, y no como edificio entero —como estipula la normativa cuando se trata de una rehabilitación integral—. A pesar de nuestra insistencia para formar parte de una mesa a tres bandas, la empresa no quiso en ningún momento sentarse a hablar con nosotros —o eso nos trans-

mitieron desde la alcaldía—. Luchamos para ser reconocidos como actor y parte del conflicto para poder tener voz propia, pero en este caso no fue posible. Nos tuvimos que conformar con opinar sobre las propuestas que ofrecía el Ayuntamiento a la empresa y sobre lo que esta negociaba en contrapartida. El acuerdo resultó una victoria pírrica. El Ayuntamiento, mediante el tanteo y retracto, había comprado una finca a dos calles del bloque de Feliciano y le otorgaba un piso a través de la Taula d'Habitatge<sup>15</sup>. Por lo tanto, dejaba vía libre a Norvet para seguir con las obras una vez regularizara la situación. En contrapartida, se comprometían a que dos pisos de otra finca de su propiedad pasaran a la Bolsa de Vivienda. El Ayuntamiento otorgaba a los propietarios que rehabilitaran su piso viejo 15.000€, a cambio de que estos lo alquilaran a un precio por debajo del de mercado durante cinco años, pasando a precio libre una vez transcurrido este periodo. Negocio redondo!

A raíz del increíble trabajo de movilización y concienciación que habíamos realizado durante los doce meses anteriores, recogeríamos los frutos durante el 2017-2018, el curso del apogeo del Sindicat de Barri. Apenas arrancar, un grupo de gente de Sants okupó varios pisos en un bloque del barrio, al margen del Sindicat. Este fue bautizado como Bloc Llavors y había sido comprado por Vauras Investments. Su plan ya era un clásico: aumento de alquileres, ir expulsando a la gente y hacer una reforma de lujo para nuevos compradores. Curiosamente, el precio de los pisos

proyectados era de medio millón de euros, cifra que coincidía —¡oh casualidad!— con la inversión mínima de capital que tenía que hacer un inversor extranjero si quería obtener el permiso de residencia español —el llamado Visado de Oro—.

Lo que nos interesa ahora para nuestro relato es que demostró como la convivencia entre arrendatarios clásicos y okupas era posible, pero con limitaciones. Desde un primer momento, desde el grupo de okupación, se invitó al resto de residentes de los bloques a resistir unidas y trazar una estrategia conjunta contra la propiedad, pero ocurrió todo lo contrario. Cada inquilino —algunos de ellos con renta antigua— estableció su prioridad y negociación particular, aquello que el refranero recoge como «que cada palo aguante su vela». Pero esto no impedía que la mayoría de la comunidad de vecinos apoyara la okupación. Y sobre todo, se establecieron lazos de complicidad vecino por vecino, hecho que ayudaría posteriormente en la defensa del bloque. Además de esta particularidad, los militantes por la vivienda que se habían mudado al barrio con la nueva okupación, decidieron implicarse en el Sindicat como parte de la defensa de su vivienda. Un grupo de cuatro o cinco personas muy activas y con experiencia en otros colectivos se incorporó a la organización. A la vez se acercaron tres o cuatro activistas más, provenientes de otros lugares de Europa. Y finalmente, otros tres o cuatro de otra okupación —Borrell 59—, del barrio vecino de Sant Antoni. Llegaban refuerzos en el momento que más lo necesitábamos.

Los últimos meses de 2017 fueron un alud de casos de desahucio por impago de alquiler. La crudeza de la crisis de la vivienda se mostraba ante nosotros. Una combinación de precariedad, pérdida de trabajo, paro crónico, pensiones irrisorias, pobreza energética, migración y soledad, frente a unos enemigos dispuestos a extraer hasta la última gota de rendimiento del mercado-casino inmobiliario. A menudo nos encontramos con gente que venía la misma semana del desahucio y conseguíamos pararlo en la misma puerta. Muchos casos tenían contratos de palabra, o bien la propiedad había cambiado, o eran bajos de fincas sin cédula de habitabilidad.

Por nuestra parte insistimos en la necesidad de anticiparse, de acudir al Sindicat a organizarse cuando se detecte el primer problema o no se pueda pagar una mensualidad. La única estrategia posible ante un fenómeno tan masivo es tratar de ganar tiempo parando desahucios, poniendo recursos y haciendo acciones en despachos y oficinas. Y funciona. Movilizamos a mucha gente, nuestros canales de comunicación no se paran y atraemos gente solidaria del barrio —y de otros barrios— que no participa en el Sindicat, pero que se presenta de siete a nueve de la mañana para parar un desahucio antes de ir a trabajar. Llevamos una pancarta gigante, un altavoz autoamplificado, todos con la camiseta roja y gritamos «¡Força Sindicat!». Cada piso se convierte en una trinchera. Paramos uno, dos, tres, cuatro, cinco y más desahucios y nos especializamos en adelantarnos a la Comitativa Judicial, que cada día, par-

tiendo desde la Ciudad de la (in)Justicia, hace un recorrido rotativo por los barrios del centro desahuciando a diestro y siniestro. Hacemos mucho ruido, la gente sale de los balcones con cazuelas, otras veces graba con el móvil —guiris de Airbnb flipando con la fiesta—. Las yayas se paran por la calle a apoyarnos. Los yayos salen del bar con el café para comentar la jugada y obligamos a cada coche y a cada camión que pasa a tocar el claxon. Todo el mundo lo tiene que saber, quieren echar a una familia del barrio. Así llegamos hasta unos 40 desahucios parados en un solo curso.

La presencia constante de la policía es rutinaria y mucha gente les va perdiendo el respeto. Ellos son el brazo ejecutor de la (in)Justicia. La violencia del sistema materializada en cuerpo y alma en unas personas que visten de uniforme. Contra ellos se dirige toda nuestra rabia. Defendemos con nuestros cuerpos las casas de la gente y sabemos que cada pequeña victoria repercute en que el barrio pueda seguir existiendo. Descubrimos que las compañeras del Sindicat que se han acercado como afectadas, son las que expresan los discursos más contundentes. Son las auténticas portavoces, gritando más fuerte que nadie y diciendo las cosas claras a los cuatro vientos. Sin elucubraciones ni teorías, desde la vivencia más penetrante de quien se puede quedar en la calle sin nada, con una fuerza y energía que sorprende y que remueve a quién lo escucha. Una foto de familia con toda la gente que ha contribuido a parar el desahucio cierra cada acción. No nos olvidamos de

celebrar siempre las victorias y de expresar la alegría de haberlas hecho posibles y, así, hacer que otra gente lo sepa y se contagie del mismo sentimiento.

Pero también hay veces que nuestros enemigos son más fuertes y todo se viene abajo. Fue el caso de Souad, una mujer joven con dos hijas a quienes les habían alquilado un piso mediante un contrato falso. Posteriormente a una compraventa, el nuevo propietario no dudó en iniciar los trámites de expulsión negándose en todo momento a encontrar una solución negociada, aunque fuese temporal. Después de haber parado algunos desahucios recibió una notificación judicial con la temida «fecha abierta». Este mecanismo judicial permite a la policía efectuar el desahucio en el intervalo de tres a quince días, pudiéndose presentar a cualquier hora del día o de la noche. Además de la amenaza de quedarse en la calle, te cae una condena agónica durante la cual vale más que no salgas de casa si no quieres volver y encontrarte todas tus cosas tiradas en la acera y sin poder entrar. En este caso movilizamos todos nuestros recursos y, con la ayuda de gente de otros barrios, establecimos turnos hora a hora, durante una semana, para detener lo que parecía inevitable. El primer día no vinieron, el segundo tampoco, ni el tercero. Aparecieron un jueves.

Mientras hacíamos guardia ante el portal y aprovechando que Souad había ido a llevar a sus hijas a la escuela, dos furgones de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra atravesaron la Avenida del Paralelo a toda velocidad y subiendo a la acera nos rodearon. Eran

las 9:15 y el día iba a ser muy largo. Por suerte manteníamos la puerta abierta y bajo nuestro control, y subimos a toda velocidad hacia el piso para hacer un intento desesperado de resistencia. Uno de nosotros pudo atrincherarse dentro amontonando todo lo que encontró: una nevera, una lavadora, estanterías, maderas y libros. Simultáneamente, la alarma ya recorría todo el barrio y en poco menos de un cuarto de hora una muchedumbre de gente se apiñaba ante la policía. Armados con metralletas como si se tratase de un operativo antiterrorista, los Mossos nos amenazaban con una detención masiva. La imagen del dispositivo desplegado recorrió todas las redes sociales digitales y no paraba de llegar más y más gente dispuesta a entrar en el bloque. Teníamos cortados los seis carriles de la Avenida en los dos sentidos de circulación e intercambiábamos impresiones con el interior del piso, manteniendo la presión en las dos partes. No les sería nada fácil sacarnos de allí y cada minuto que pasaba jugaba a favor nuestro. Se acercaba el mediodía y entonces, el eslabón más débil cedió: Souad decidió que no quería que nadie arriesgara más de lo necesario por ella. Tenía la última palabra y bajamos los brazos para a continuación ayudarla a sacar las cosas de su casa.

Teníamos una familia que se había quedado sin casa pero en el Sindicat nadie se queda en la calle nunca, así que activamos nuestros recursos de emergencia. Después de ir por diferentes casas y un intento fallido de okupación, finalmente la Mesa de Emergencia le ofreció un piso en Hospitalet al cual accedió. El

caso quedaba cerrado. Habíamos topado con nuestros límites y también se habían desvanecido algunas ilusiones. Al cabo de un mes hicimos esta reflexión:

«Este caso nos obliga a reflexionar en qué punto nos encontramos como Sindicat de Barri en base a 3 ideas: la represión, la capacidad material de realojamiento y la pertenencia al barrio.

1. La represión se hizo evidente el mismo día del desahucio. Las fuerzas del Estado hicieron valer la ley ante la oposición y la resistencia de las vecinas. Hicimos un papel digno pero no suficiente para parar el desahucio. Dentro del piso se vivieron momentos de descoordinación y finalmente se vaciló y cedió ante la superioridad policial y su fuerza simbólica. Hay que seguir pensando como hacerlo. Ante un desahucio con fecha abierta nuestras capacidades son muy limitadas y en un segundo caso más reciente se ha optado por la táctica de la no confrontación o no desgaste. Mejor esquivar el golpe de momento.
2. La capacidad material de realojamiento, o mejor dicho, la incapacidad actual del Sindicat para realojar miembros en condiciones dignas y de forma estable, se ha hecho evidente. Y más considerando los límites de la okupación dentro de nuestro barrio y de la okupación en general. El caso concreto de Souad, con un periplo por diferentes casas de amigas y hermana, ha evidenciado esta carencia y creado una distancia entre Sindicat y afectada. Surgen muchas



preguntas, como por ejemplo si ha habido una buena comunicación, si la persona ha podido/querido participar de nuestro modelo organizativo y si ha confiado después del desahucio... quizás son preguntas muy íntimas que no podemos responder sin la persona afectada. Lo que está claro es que hay que escoger mejor los objetivos okupables, tener claro que no solo okupando resolveremos el problema y también que no todo el mundo querrá optar por esta opción.

3. La pertenencia al barrio significa como creamos esta necesidad, este deseo de sentir el Poble Sec parte de uno mismo. Qué vínculos generamos entre nosotros, en nuestro día a día para que esto sea posible. Para que cuando el Ayuntamiento te ofrezca un piso en el Hospitalet —que sin duda soluciona tu problema de vivienda—, al menos dudes y luchas para que este esté en el barrio. ¿Tener el trabajo, la escuela, las tiendas, los amigos, las aficiones, el huerto en el barrio? ¿Participar en las Fiestas Mayores? Luchar por el barrio y aprender a defenderlo y a luchar por la gente que vive es el camino, pero esforcémonos en concretar como hacerlo...».

En cuanto a los realojamientos en el barrio, desde el inicio de aquel curso habíamos promovido la okupación —o recuperación de pisos— como vía para amparar los casos que no encontraban solución por los canales institucionales. Aplicamos, junto con las mis-

mas vecinas del barrio, todos los conocimientos acumulados del mundo okupa —visualizar pisos, hacer un seguimiento cuidadoso, preparar la entrada, acceder, realizar permanencias, etc.— para que todo el mundo tuviera un lugar donde vivir. Con esto se rompen muchos tabúes y mucha gente se empodera, pero no tanto como queríamos. Enseguida surge un grupo especializado que, a la fuerza, tiene que actuar en la sombra. Aparecen desconfianzas sobre a quienes se le okupa un piso y cuándo; alguna gente no se implica y, finalmente, caemos en el asistencialismo. Nos damos cuenta que la herramienta funciona como recurso pero que no se puede aplicar indiscriminadamente. Por lo tanto, empezamos a poner límites. Establecemos como prioridad okupar bloques enteros y que estos sean gestionados directamente por el Sindicat, con contratos de convivencia para cada familia, pero con autonomía en cuanto a la organización de la vida en comunidad. Es el caso del bloque La Deshonrada, que sigue en pie después de varios intentos de desahucio o, más recientemente, El Parlament y La Gàl·lia. A parte, para tener una solución temporal en los casos más críticos, se okupan algunos pisos en diferentes puntos del barrio.

Cerramos el curso en julio de 2018 agotadas física y anímicamente. Lo hemos dado todo; podemos estar orgullosas, pero también ha habido daños. El desgaste emocional de lidiar con situaciones extremas, donde el estrés y la ansiedad recorren los días y las horas de las afectadas, nos contagia a todas. Afloran críticas a cosas que no funcionan, como el hiperactivismo,

o ciertos liderazgos más o menos autoritarios. Por un lado se analiza en clave de género, puesto que tanto en las asambleas como en los roles protagonistas hay una presencia agobiante de hombres blancos jóvenes. También en las actitudes agresivas que se adoptan en las acciones o en los enfrentamientos con la policía. Pero la composición del Sindicat es diametralmente opuesta: Cuba, República Dominicana, Rumanía, Marruecos o Pakistán son los orígenes de la mayor parte de vecinas con quienes nos organizamos, que mayoritariamente son mujeres —madres solas, a menudo con muchas criaturas, hermanas, abuelas, hijas, etc—. Del núcleo familiar, quien tiene la iniciativa de salvar el techo son las mujeres, ellas son quienes sostienen la familia y quienes hacen lo imposible para seguir teniendo un lugar donde vivir. También recaen en ellas las tareas emocionales. Una de las iniciativas que impulsa el Sindicat es crear un Grupo de Mujeres donde encontrarse, hablar, intercambiar y empoderarse. Se realizan, por ejemplo, talleres no-mixtos de comunicación con prensa y de expresión en público.

El idioma es otro factor que nos juega en contra, dada la diversidad de orígenes. Muchas veces se necesita traducción simultánea para las personas que acaban de llegar. Por suerte, contamos con personas de todas partes que se han involucrado en la organización realizando este trabajo. Hoy en día prácticamente la totalidad de la asamblea transcurre en castellano, mientras que el catalán ha quedado relegado a la comunicación a través de los canales digitales, escritos

y con la prensa. Si analizamos este fenómeno, llegamos a la conclusión que se da porque los perfiles más militantes son de origen europeo o catalán y, a la vez, son los que se encargan mayoritariamente de estas tareas.

A menudo, quien alza más la voz, tiene el discurso más elaborado o más capacidad oratoria, ahoga otras voces que no encuentran espacio para expresarse. Progresivamente van quedando arrinconadas y se llega a un punto en que la pluralidad de la organización no se ve reflejada en las decisiones. Otras veces es por una cuestión del tiempo que cada cual puede dedicar al Sindicat. Quién puede participar en más comisiones, más campañas, llevar el Twitter o ir a acciones, acaba erigiéndose como referente para muchas afectadas —especialmente las recién llegadas—. Las personas que adquieren este rol se ven por el resto como decisivas: «Si quieres solucionar tu problema de vivienda, ve al Sindicat y habla con tal persona, él te ayudará». La experiencia es un camino largo que se tiene que recorrer día a día con implicación y paciencia. En cuanto al conocimiento, es una tarea colectiva que se distribuya entre todas y esté accesible. Experiencia y conocimiento también son privilegios. La división entre activista y afectada sigue recorriendo la vida del Sindicat con altibajos.

En definitiva, reflexionamos y nos damos cuenta que no podemos con todo. La energía que hemos sido capaces de movilizar ha sido increíble y hemos vivido momentos de mucha intensidad donde todo era

posible. Esto nos había llevado a aceptar todas las propuestas y campañas en las cuales nos ofrecían participar otros grupos de vivienda —contra Desokupa, contra las Fechas Abiertas, Manifestación por la Vivienda, por un Turismo Sostenible, etc.—. Además, la amenaza de la represión que sobrevolaba nuestras cabezas ha entrado en escena y empiezan las identificaciones, las denuncias y los juicios. Toca activar las defensas en forma de solidaridad, caja de resistencia y abogadas. Muchas preguntas nos asaltan pero habrá que esperar a la vuelta del verano para empezar a resolverlas.

Saltamos un curso más y ya estamos en el 2018-2019. Es el curso de la resaca y la fatiga; de mirar atrás y pensar que «cualquier tiempo pasado fue mejor». Al menos es la visión que tiene una parte de la gente que conforma el Sindicat y se hace patente el consenso, en que no podemos soportar una intensidad tan grande un año más. De aquí surge la voluntad de reorganizarnos para consolidar la estructura y seguir en pie. El pilar básico, casi como un ritual, son las asambleas semanales que realizamos cada lunes por la tarde. Para organizarnos, hay siempre una mesa dinamizadora con diferentes tareas: preparar los puntos del día, anotar los turnos de palabra y tomar acta. Para arrancar, una de nosotras explica qué significa para ella el Sindicat de Barri. Hablamos de las cosas que han ocurrido la semana anterior —por ejemplo parar un desahucio—; repasamos las actividades y convocatorias de la semana en curso: grupo de mujeres el miércoles,

fútbol los jueves o ir al Raval el viernes para apoyar los desahucios que tienen ese día.

Mientras tanto la gente llega, va cogiendo sitio —la puntualidad es flexible— y empieza el núcleo duro de la asamblea: los puntos políticos y el asesoramiento colectivo. El orden de estos dos puntos ha cambiado con los años. Al principio, el tratamiento de los casos se hacía en primer lugar para después pasar a hablar de cuestiones políticas y organizativas. Este orden propiciaba que mucha gente se marchase una vez se había hablado de su caso y que al final de la asamblea, solo quedara la gente más implicada o militante. Por lo tanto decidimos cambiarlo y desde entonces tratamos primero los puntos políticos. Así, toda la gente que asiste se ve de alguna manera «obligada», al menos, a escuchar. En esta parte hablan las diferentes comisiones —debatimos, por ejemplo, la participación en espacios de coordinación, propuestas de otros grupos, o peticiones externas, como participar en un documental contra la especulación—.

Después llega la parte en que las personas que han llegado al Sindicat en busca de ayuda, exponen ante el grupo su problema. Previamente habrán pasado por la «bienvenida», paso imprescindible antes de hablar en la asamblea<sup>16</sup>. También, se presenta cada nuevo caso y se llena una ficha con los datos básicos. Es una manera de que la gente nueva no se sienta abrumada con nuestra dinámica de grupo y que, poco a poco, se vaya entrando y entendiendo el funcionamiento de la organización. Con los datos básicos se hace una

valoración inicial y se indican unos pasos a seguir: ir al registro de la propiedad, llevar la documentación, contrato de alquiler, investigar la propiedad, etc. Cumplir estos pasos es imprescindible para continuar con el proceso de seguimiento y hasta que no se cumplan, no se activan los mecanismos organizativos de apoyo. La gente tiene toda la semana y puede volver el siguiente lunes, ahora sí, para explicar su caso. El orden en que se explican los casos se hace por sorteo. Una vez la persona ha terminado su explicación, se abre un turno de palabras, preguntas o dudas, y se pasa al asesoramiento colectivo. Si alguien ha vivido un caso similar, empatiza con la otra persona, relata su experiencia y explica como lo resolvió. Se inicia la cadena de solidaridad entre las afectadas: «hoy por ti, mañana por mí». Trazamos la estrategia y los pasos a seguir: abrir una negociación con la propiedad, iniciar una campaña mediática o preparar el desahucio, y nos repartimos las tareas. En este punto, si la persona lo necesita, puede pedir apoyo para realizar una tarea concreta.

El acompañamiento es muy delicado y hemos experimentado con diferentes modelos. Al principio asignábamos una acompañante a cada afectada. El problema era la sobrecarga que representaba un proceso que podía durar entre seis y doce meses, hasta resolver el caso. Además que generaba una dinámica asistencial: la persona afectada, en lugar de tener iniciativa propia, esperaba que el acompañante resolviera cada paso. Por lo tanto decidimos saltar al extremo opuesto: no habría

acompañamiento de ningún tipo, cada cual resolvería todos los trámites por sí mismo sin más apoyo que en el momento del asesoramiento colectivo. Y aquí aparecieron las informalidades: las afectadas buscaban a las personas que identificaban con más conocimientos y les pedían ayuda personalizada, en espacios fuera de la asamblea. Finalmente hemos encontrado un punto de equilibrio: se asigna gente acompañante para tareas puntuales pero sin que recaigan siempre en una sola persona.

Otro componente clave que cada vez trabajamos más es el factor humano. A pesar de las etiquetas de afectado, militante o activista, lo cierto es que cada vez hay más mezcla entre nosotros. Pero es un proceso lento que no termina nunca, puesto que siempre va entrando y saliendo gente, y cada cual tiene altibajos vitales que lo hacen estar más cerca o más lejos, según el momento. Por lo tanto, más allá de las personas está la reproducción de la estructura organizativa del Sindicat. Esta estructura se tiene que sustentar a lo largo del tiempo y tiene que ser flexible para incorporar diferentes ritmos y formas de participación, dando cabida a personas recién llegadas, sin ninguna experiencia política; a afectadas o exafectadas que han decidido sumarse a la lucha y van aprendiendo por el camino; y a los militantes experimentados que han encontrado en el Sindicat un lugar donde organizarse y desarrollar una lucha política de largo recorrido. Para hacerlo posible trabajamos desde diferentes frentes:



1. Claridad organizativa: conocer las comisiones, quién las forma, quién es el responsable, qué atribuciones y limitaciones tienen.
2. Redistribución de tareas: comisiones rotativas, exponer necesidades concretas en la asamblea, abrir la participación a todo el mundo.
3. Accesibilidad de la información y transmisión del conocimiento: documentación al alcance de todo el mundo disponible en cualquier momento —mediante Telegram, Libro del Sindicat, o nube en internet— y formaciones colectivas para equiparar conocimientos.
4. Formalidad: creación de protocolos de funcionamiento en caso de conflicto dentro de los bloques, en la dinámica de la asamblea y en los canales internos de comunicación, fijando las líneas rojas del Sindicat.

En resumen: nos hemos puesto serios. Quizás a veces más de la cuenta, complicándolo todo y burocratizando cosas que funcionaban informalmente. Pero es nuestro proceso y en él aprendemos mientras hacemos y deshacemos cuando conviene. Todo con una premisa básica: no destruir todo el trabajo acumulado para volver a empezar de cero, sino coger lo que funciona y repensar lo que no funciona para ir añadiendo capas de experiencia a los mecanismos y herramientas que hemos construido.

Nos situamos en el presente<sup>17</sup>. No podemos ofrecer grandes reflexiones pues tenemos muchos frentes abiertos y mucho trabajo por delante. Seguimos en pie, con una estructura consolidada y tratando de no quedarnos estancados. Planificamos una campaña para atraer otros perfiles del barrio: arrendatarios de toda la vida, gente afectada por el turismo y fincas de propiedad vertical. Los retos que tenemos son muy grandes: luchar contra las mafias de reventa de pisos y organizar los casos por propietarios a escala metropolitana; integrar las diferentes sensibilidades del Sindicat y conseguir que más jóvenes entren en la organización y la hagan suya; abrir el frente laboral; y el más grande de todos: organizar un movimiento. Somos conscientes que solo desde nuestro barrio, desde nuestra acción local, no seremos capaces de derrotar a nuestros enemigos. El I Congreso de Vivienda de Cataluña, celebrado el 14 y 15 de noviembre de 2019, va en esta dirección y nos implicamos a fondo en su organización. Es un espacio para trazar, con otros 50 grupos de vivienda y organizaciones de todas partes, una estrategia para ganar. Acordamos un programa conjunto de gran alcance, que se resume en cuatro puntos:

1. Stop desahucios.
2. Pinchemos la burbuja de los alquileres.
3. Expropiación de los pisos de los bancos y fondos buitres.
4. Seguir construyendo el movimiento popular.

El Congreso promueve la creación de estructuras organizativas más allá de municipios y barrios: base de datos conjunta y boletín informativo; bolsa de formadoras y de abogadas; y campaña contra Divarian —otro fondo buitre con nombre aberrante—.

«Lo sabemos, nuestros enemigos son grandes, pero más grande es nuestra determinación, no nos echarán, los echaremos nosotros a ellos».<sup>18</sup>

Acabamos con un parte urgente, extraído del boletín de socias del Ateneu La Base, que resume el momento en que se encuentra el Sindicat:

«El inicio del año en el Sindicat no ha podido ser mejor. Empieza con una gran victoria. El Bloc Llavors donde se encontraban bajo amenaza de desahucio seis familias, ha sido el primero en beneficiarse del Decreto del Gobierno de diciembre pasado que obliga a grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de pedir el desalojo. El pasado 10 de octubre la resistencia popular y una buena estrategia hicieron que fuera impracticable. Esta vez, tres días antes de la fecha establecida la jueza lo ha suspendido. Hay que recordar que estas victorias no se producen por la buena voluntad del Estado sino que son fruto de años de lucha y perseverancia, parando desahucios y organizándose cada vez mejor, como con el Congreso de Vivienda. Aun así, a pesar de que la nueva ley ponga freno a algunos casos dramáticos, el robo que estamos sufriendo con los alquileres no se ha revertido y habrá que seguir luchando para sacar del mercado la vivienda. El lunes

volvemos con la primera asamblea semanal del año para ver como afrontar los casos que vendrán y las nuevas perspectivas de lucha para el 2020. Un buen momento para sumarse!!! ;».

# Espai Veïnal del Cabanyal



Espai Veïnal del Cabanyal (EVC) nace en septiembre de 2015 a raíz de un comunicado escrito por un grupo de vecinas que nos conocíamos de proyectos anteriores en el barrio, el cual repartimos en julio por casi tres mil casas del Cabañal. Hacíamos una pequeña reflexión de la situación del barrio, enfatizando el incuestionable proceso de gentrificación en el que nos estábamos adentrando, convocando una asamblea abierta para el 3 de septiembre del mismo año. Esta fue secundada por unas 120 vecinas. Pero, ¿cómo habíamos llegado a este punto?

Como muchas sabréis, el Cabañal ha vivido durante largos años una lucha contra la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez. Este proyecto urbanístico (Plan Especial de Protección y Reforma Interior, PEPRI), inicialmente ideado por el último gobierno del PSOE en la ciudad, sería más tarde encabezado por el gobierno del PP de Rita Barberá durante sus 24 años de mandato en el consistorio. La parálisis urbanística y la acción premeditada de la administración pública adentraron al barrio en un largo y profundo proceso de degradación física y social. Sería, como más adelante identificaríamos, la primera fase de un proceso de gentrificación de

«manual»: la degradación y desvalorización económica del barrio.

Esta amenaza, que pretendía el derribo de más de 1.600 viviendas, supuso una basta degradación del barrio. El PEPRI, bajo la amenaza de expropiación, obligaba a vender las casas a la administración pública —en concreto, a Cabañal 2010, empresa público-privada creada *ad hoc* para llevarlo a cabo— a precios irrisorios. El resultado fue que más de 600 familias abandonaron el barrio, pasando las casas a manos de la administración, de las que terminaron siendo derribadas más de 300. Este vaciamiento de vecinos fue acompañado de todos los elementos típicos de una degradación orquestada por las administraciones: permisividad en la instalación de puntos de venta de droga, abandono de servicios urbanos, nula inversión en servicios públicos, etc.

Pero frente a todo este proceso de degradación y amenaza de expulsión vecinal se puso en marcha uno de los movimientos de resistencia vecinal más contundentes del País Valencià. En los años noventa se creó la Plataforma Salvem el Cabanyal, la cual capitanearía el movimiento de resistencia durante prácticamente todos los años del conflicto. Hay que tener en cuenta que el Cabañal mantiene rasgos diferenciales propios de un pueblo: principalmente, una gran estructura urbana en malla de casas bajas, donde muchas familias han vivido durante generaciones y donde se ha mantenido una cierta red social vecinal de calle —motivo por el cual, entre otros, es uno de los barrios de Valencia con más



valenciano hablantes—. Así, la Plataforma Salvem el Cabanyal tuvo centenares de vecinos asociados. A la vez, después del conflicto territorial de La Punta, un número importante de gente del movimiento okupa de Valencia se instaló en el Cabañal para involucrarse en la lucha por su defensa. Primeramente, okupando varias viviendas como método de resistencia contra los futuros derribos y, en segundo lugar, abriendo varios centros sociales okupados —Pepika la Piona, Malas Pulgas, La Fustería, Proyecto Mayhem, etc.— y creando la Asamblea del Cabanyal, de carácter marcadamente anticapitalista y autónomo.

Con el tiempo, el Cabañal acabó convirtiéndose en un foco de lucha en la ciudad, mientras los dos sectores de la resistencia vecinal andaban, de una o de otra forma, contra el mismo enemigo. Es este contexto, el de un vecindario acostumbrado a veinte años de lucha en un conflicto urbano y el de un sector bastante importante del movimiento anticapitalista de la ciudad instalado en varios proyectos de barrio, el que determinará, en cierto modo, el actual carácter combativo del Cabañal.<sup>19</sup>

Finalmente, con el cambio de gobierno municipal en 2015, se tumbó definitivamente el proyecto de ampliación de la avenida Blasco Ibáñez<sup>20</sup>. Entonces, se abrió la oportunidad de ver en qué punto estábamos y qué amenazas surgían de la nueva situación. Es en este punto de inflexión cuando un grupo de vecinas vemos con claridad lo que ya habíamos empezado a plantear años atrás en la Asamblea del Cabanyal:

que todo este proceso de degradación del barrio no era nada más y nada menos que la primera fase del proceso de gentrificación, un concepto que muchas conocíamos desde hacía relativamente poco. Así, ya extinguida la Asamblea del Cabanyal, y viendo que la Plataforma Salvem el Cabanyal estaba en sus últimos años de vida y no iba a plantear una oposición real a todo lo que nos venía encima, decidimos poner en marcha un nuevo proyecto de resistencia en el barrio. En este caso fijando la lucha contra la gentrificación como objetivo primordial. De forma muy sintetizada, la derogación del PEPRI y el contexto particular de lucha mencionado, explicarían la buena acogida que tuvieron las primeras reuniones, tanto por la cantidad de gente que acudió como por el empujón que tuvo el propio nacimiento de EVC.

Así, en un principio EVC se concibe, no como una asamblea de barrio al uso, sino como un espacio de encuentro y confluencia entre distintos colectivos, asociaciones e individualidades, que compartíamos una misma visión de la coyuntura. Este análisis compartido nos hacía partir de la firme convicción de que el nuevo cambio de gobierno y la paralización del PEPRI no iban a suponer la finalización del problema urbano, sino que nos venía encima un proceso de revalorización enmascarado bajo el paradigma de la rehabilitación, es decir, la segunda fase de todo proceso de gentrificación. En consecuencia, uno de nuestros primeros lemas fue: «su rehabilitación es gentrificación».

Las dos primeras asambleas fueron todo un éxito, superando el centenar de asistentes. Varios factores lo explicaban: un contexto y un pasado reciente de lucha vecinal; la finalización de un plan urbanístico que había sido la espada de Damocles del barrio durante dos décadas; la sensación para muchas que desde ese momento se abría todo un abanico de oportunidades para reconstruir el barrio con multitud de nuevas propuestas; el todavía vivo recuerdo del 15M, de llenar las plazas con «ilusiones renovadas»; y, sobre todo, el hecho de que muchas personas del barrio se acercaron realmente a ver qué ofrecían de nuevo ese grupo de vecinas que habían convocado este proyecto de nombre amable.

El proyecto empezó, al estilo 15M, con numerosas propuestas y comisiones: de espacio público, de vivienda, de represión policial, de convivencia, de economía y cooperativismo, de difusión y de gentrificación. El momento más participativo, al principio, fue la cumplimentación de hojas de propuestas por parte de todas las asistentes repartidas en grupos de trabajo. Cada una decía qué quería y deseaba para el barrio, a modo de lluvia de ideas, muchas de ellas, claro está, contradictorias. En una segunda fase, ya explicado a todo el mundo que aquello que nos unía era el rechazo a la gentrificación, el trabajo fuera de las instituciones, y la autoorganización y horizontalidad como ejes principales de la asamblea; cada comisión empezó sus asambleas, planteando sus objetivos y sus hojas de ruta, volcándolo todo después a la asamblea general cada quince días.

Hacia finales de 2015, la afluencia a las asambleas y a las comisiones empezó a menguar, pasando a ser menos de la mitad de los participantes iniciales en cuestión de cuatro o cinco meses. Son dos los factores principales que lo explican: una parte del vecindario se iría porque no veía claro el papel práctico y conciso en el barrio, o porque no tendría tiempo y motivación para dedicar parte de su tiempo a un proyecto colectivo; y otra parte se iría porque no encontró lo que esperaba: una respuesta y un resultado rápido a los problemas del barrio. Este último factor sería para muchas de nosotras un nuevo aprendizaje: muchas veces, la gente, que no vive el gueto militante como una forma de ocio, espera un resultado inmediato a los problemas sociales, y si no hay victorias o resultados inmediatos ve estos proyectos inútiles, como un «club social» más, como lo pueden ser la asociación de jóvenes, el hogar de jubilados, la falla, el club excursionista, etc.

Desde septiembre de 2015 hasta julio de 2016, EVC continuó organizándose por comisiones y una asamblea general cada quince días. Durante todo ese año se hicieron distintas actividades, todas encaminadas a trazar una línea común contra la gentrificación y un abanico de propuestas para dar respuesta a la diversidad de problemas que presentaba el barrio. Pero la bajada de participantes continuaba siendo constante. Durante el curso 2016-2017, dada la poca afluencia en algunas comisiones y la inoperancia de otras, pasamos a organizarnos todas en una sola asamblea semanal. Durante esos años nos dedicamos a radiografiar cada

uno de los aspectos de la gentrificación en el Cabañal y a denunciar públicamente —principalmente en comunicados, buzoneos, rutas por el barrio o asistiendo a multitud de actos y asambleas de distintas asociaciones del barrio— cada problemática. Las campañas que hicimos fueron encaminadas a concienciar al barrio de este nuevo problema: la gentrificación. Fuimos muy pesadas con este vocablo.

De septiembre de 2017 hasta junio de 2018, fue sin duda el peor periodo para EVC, reuniendo en verano de 2018 a menos de diez personas en la asamblea. Ya antes de esto, a principios de 2017, habíamos asumido públicamente un hecho: que ya no éramos ese espacio de confluencia inicial, planteado como un espacio de encuentro de distintas asociaciones, colectivos e individualidades, y que habíamos pasado a ser una asamblea de barrio. En aquel ambiente, las pocas que quedamos llegamos a bastantes consensos discursivos sobre cuales eran los problemas del barrio y cuales las perspectivas para enfrentarlos.

Con todo, son dos los hitos conseguidos en estos primeros tres años. Por un lado, gracias a explicar y difundir nuestro discurso en multitud de espacios —además de los ya mencionados, también en mesas redondas y charlas, redes sociales, radio, TV, etc.—, hemos conseguido poner la palabra gentrificación encima de la mesa. Realmente, hemos hecho que gran parte del vecindario conozca este concepto y, sobre todo, lo que implica: turistificación, especulación en la vivienda, cambio de la red social del barrio y expulsión

vecinal como norma general. Actualmente, ningún partido político ni ningún actor social del barrio discute que este es el proceso que vive el Cabañal. Por otro lado, gracias a estos tres años de dar la cara en distintos contextos, hemos conseguido ser un actor social, es decir, parte del vecindario nos conoce y sabe quién somos y qué hacemos, hecho importante en un barrio de más de veinte mil habitantes; también, que en el ámbito asociativo y político, nuestra voz se escuche.

Fruto de esta primera etapa, trataremos de aportar algunas conclusiones en clave de aspectos a tener en cuenta a la hora de poner en marcha una asamblea de barrio. Obviamente, primero hay que establecer los objetivos a corto, medio y largo plazo; para después desplegar los modelos de estrategia y táctica consecuentes. En nuestro caso, muy resumidamente son: construir una comunidad en lucha a partir de la cual desplegar experiencias y conflictos para, a largo plazo, confluir con otras comunidades en lucha en el seno de procesos revolucionarios de mayor envergadura y calado<sup>21</sup>. Desde bien pronto partimos de la premisa que había que salir del gueto militante, o al menos transformarlo, por la multitud de aspectos negativos que este comporta para la conformación de la lucha social<sup>22</sup>. Por lo tanto, llegar a constituir esta comunidad en lucha con toda la población desposeída y precarizada que no forma parte de este gueto militante ha sido —y es—, una de nuestras prioridades.

Pero, ¿como conseguir formar una comunidad en lucha? ¿A partir de qué? Son preguntas que, a estas alturas, nos seguimos haciendo. Entendemos que es a partir del conflicto social donde se constituyen estas. En un primer momento, establecimos como principio básico que solo a partir de compartir las mismas problemáticas —vivienda, represión policial, afectación por un plan urbanístico, conflictos laborales, etc.— con una parte del vecindario, sería como podríamos unirnos para plantear soluciones conjuntas. Con el tiempo, nos dimos cuenta que esta premisa es importante pero ni mucho menos la única. En consecuencia, en el Cabañal, el problema de la gentrificación y por tanto la cuestión de la vivienda, sería la base del conflicto social que nos podía unir a muchas vecinas.

Prácticamente todas las grandes ciudades del estado español compartimos el problema de la vivienda. Su enorme potencialidad para el conflicto social es una cosa que se sabe de sobra. Concretamente en el Cabañal, no estábamos huérfanos de excusas para buscar una lucha social, pero el problema de la vivienda es de primer orden y la urgencia de abordarlo era —y es— clara. Por lo tanto, es a partir de este eje donde nosotros estamos intentando constituir la mencionada comunidad en lucha. Para la gente que vive en otros lugares —rurales, ciudades pequeñas, u otros contextos distintos—, entendemos que la idea es constituir la comunidad en lucha a raíz de la principal problemática social existente en cada lugar, y nadie mejor que las que habitan para saberlo. Por lo tanto, resulta básico hacer un diagnósti-

co lo más profundo posible de las causas estructurales de la pobreza en cada territorio, de los mecanismos de opresión y explotación capitalista, etc. Todo para saber cual tendrá que ser el punto de partida. Una vez llevada a cabo esta primera identificación, habrá que conocer como la palma de la mano todas las características del contexto y territorio donde vives. A EVC, solo ese trabajo nos llevó casi un año.

Una vez realizado este multianálisis y teniendo más o menos claro el objeto y sujeto principal de nuestra lucha, tendremos que darnos a conocer, de todas las maneras y por todos los medios posibles. Lo más importante es que la gente sepa que existes, para lo cual se han de recorrer mil lugares. A nosotros, por ejemplo, nos sirvió mucho llenar los buzones de cada casa y pegar carteles. Ya sabemos todas que nuestras redes sociales —Twitter, Facebook, Instagram y Telegram— no suelen llegar a la gente fuera de la órbita de los movimientos sociales, pero igualmente, son fundamentales. Sería conveniente tener también en cuenta otros aspectos, como interesarse por modelos de lucha similares en otros territorios; relacionarse con los movimientos sociales de tu zona, conociendo sus potencialidades y sus carencias; y, sobre todo, probar y probar, teniendo claro que quien no arriesga no pesca. También hay otros aspectos que seguro desconocemos o que, conociéndolos, no hemos podido llevar a cabo, así como otros que se nos olvidará comentar.



Estamos en verano de 2018. Después de un año donde cada vez éramos menos y viendo que nos hacía falta una reformulación del proyecto para no morir de inanición, decidimos apostar por el sindicalismo de barrio, atendiendo a distintas razones. Así, en septiembre hacemos público un comunicado que repartimos por todas las casas del barrio, titulado «Espai Veïnal del Cabanyal: cap al sindicalisme de barri», donde explicamos muy brevemente nuestros logros y el nuevo planteamiento de la asamblea<sup>23</sup>. Ya hacía tiempo que oíamos hablar de sindicalismo de barrio, sobre todo desde Barcelona y, concretamente, a las compañeras de Poble Sec. Sí, no hemos inventado nada. En un primer momento veíamos en ese concepto algunas ideas muy claras y que, a la vez, entraban en plena sintonía con lo que habíamos intentado llevar a cabo desde un principio. Así que, por un lado, no íbamos a hacer ningún cambio radical en los planteamientos de la asamblea y, por otro, adoptábamos un nuevo concepto de lucha que, además de ver que en otros lugares funcionaba, aportaba una idea muy concreta: nunca más, ninguna vecina que sufriera una injusticia social, tendría que hacerle frente a solas.

Pero, ¿qué es eso del sindicalismo de barrio? Valga decir que no hemos hecho un análisis teórico e ideológico del concepto, es más, ha habido cierta manía entre muchas de nosotras a no hacer una militancia de «salón», lo que nos ha llevado a centrar nuestros esfuerzos en una vertiente eminentemente práctica, olvidando, quizás a veces, la parte más teórica o ideológica de la

lucha, también necesaria en aquello del binomio teoría y práctica. Entonces, podemos decir que, para nosotros, el sindicalismo de barrio es una idea, un concepto, o una manera de entender la lucha social de barrio. La cuestión consiste en trasladar a los barrios el concepto de defensa comunitaria que existía en las fábricas en las épocas de mayor pujanza del movimiento obrero, tanto desde el anarcosindicalismo más combativo como desde la autonomía. En un momento histórico donde la conciencia obrera se encuentra bajo mínimos y, donde la tecnología y la flexibilidad han dinamitado en gran medida las comunidades de lucha obreras que existían hasta la desindustrialización; lo que proponemos es generar el sujeto revolucionario alrededor de los barrios, alrededor del sujeto vecinal. Pensamos que actualmente los barrios reúnen bastantes de los aspectos potenciales que antes reunía la fábrica, y que quizás el barrio es un buen nexo de unión entre las explotadas —oprimidas, precariado, o como se quiera llamar—.

Pero que nadie se equivoque: en ningún caso nosotras planteamos sustituir al sujeto obrero por el sujeto vecinal, ni la fábrica por el barrio. Es cierto que el sindicalismo combativo ha de hacer —y lo está haciendo— un esfuerzo para llegar a la nueva estructura del trabajo, puesto que el modelo sindical industrial ha quedado, en parte, obsoleto; pero esto no quiere decir que quienes apostemos por el sindicalismo de barrio despreciemos al sindicalismo combativo, ni mucho menos. De hecho, lo que hará falta es trabajar juntas, desde los barrios y desde los puestos de trabajo. Lo que pre-

tendemos es trasladar a los barrios todos los métodos y formas de lucha que han funcionado históricamente en el sindicalismo combativo. Hacer de los barrios lo que eran antes las comunidades de lucha formadas alrededor del puesto de trabajo: acción directa, horizontalidad, solidaridad, apoyo mutuo, camaradería, huelgas, piquetes, sabotaje, etc. Es por esta razón que nos resultó atractivo el concepto de sindicalismo de barrio. Porque al fin y al cabo, todo gravita sobre lo que nosotras ya veníamos hablando tiempo atrás: una comunidad en lucha.

Así pues, volviendo a lo práctico, cuando empezamos a hablar de sindicalismo de barrio nos planteamos que en nuestra asamblea se pueda abordar cualquier tipo de injusticia social que sufra el vecindario. Desde problemas relacionados con la vivienda —desahucios y desalojos, subidas de alquiler, pisos turísticos, etc.—; de ámbito laboral —despidos, acosos, etc.—; con la policía; o de convivencia entre grupos de vecinos. También, además de problemas, propuestas más transformadoras de carácter autogestionario y autoorganizadas, como por ejemplo fiestas populares, bancos de alimentos, comedores, gimnasios populares, etc. La razón de mezclar todos estos temas es muy simple: si la misma vecina que acude a la asamblea a parar su desahucio tiene un problema en el curro o con la policía, y ve que en la misma asamblea también puede encontrar apoyo para afrontarlo, el sentimiento de pertenencia a la comunidad crecerá exponencialmente. Y recordamos,

de lo que se trata es de crear una comunidad en lucha fuerte.

Damos un salto al presente, a enero de 2020. En estos últimos meses, la asamblea ha doblado y casi triplicado el número de militantes. Actualmente, la vivienda es nuestra principal tarea. Es aquello que más trabajo nos supone y en lo que más experiencia estamos adquiriendo. Lo cual resulta obvio si se conoce el actual problema de precariedad habitacional. Por ser una necesidad básica de primer orden, es aquello por lo cual las familias están más obligadas a luchar. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, somos casi más un sindicato de vivienda que un sindicato de barrio. A pesar de esto, pensamos que es interesante mantener el concepto de sindicalismo de barrio por no cerrar las puertas a lo que podamos hacer en un futuro, es decir, estar abiertos a que el vecindario acuda a tratar problemas que no estén únicamente relacionados con la vivienda.

Más allá de nuestra experiencia desde EVC, consideramos importante comentar resumidamente el contexto de Valencia y del propio Cabañal. Las asambleas de barrio nos encontramos coordinadas en EntreBarris, donde nos agrupamos los barrios de La Saïdia (Saïdia Comuna), Orriols (Orriols en Bloc), Ciutat Vella (Veïnat en Perill d'Extinció), Ruzafa (Russafa Veïnal), Benimaclet (Cuidem Benimaclet i CSOA l'Horta) y Cabañal (EVC). EntreBarris nos reunimos quincenalmente en asamblea de coordinación y, a la vez, hay tres comi-

siones —Afectadas, EntreDades y Portavoces y Comunicación— y tres mesas de trabajo —Turismo, Vivienda y Modelo de Ciudad—. El papel de EntreBarris es coordinar a los barrios bajo unos consensos comunes —surgidos a partir de plenos anuales— para así poder hacer campañas y luchas conjuntas, a la vez que nos apoyamos en las luchas de cada barrio. Es, quizás, una peculiaridad con el resto de ciudades del estado español, pues al ser Valencia una ciudad ni demasiado grande ni demasiado pequeña, hemos sido capaces de crear una coordinación estable de diferentes barrios, lo cual nos da fortaleza y unidad a escala de ciudad. Habría que añadir que también está la PAH y otras organizaciones de vivienda con las cuales trabajamos en consonancia a pie de calle.

Por otro lado, en el Cabañal nos encontramos con algunas novedades. A finales de 2019 se disolvió la Plataforma Salvem el Cabanyal, puesto que, en palabras de sus integrantes, daban por ganada y finalizada su tarea con la derogación del antiguo PEPRI. Pero a este le ha seguido un nuevo plan urbanístico: el Plan Especial del Cabañal-Cañamelar (PECC)<sup>24</sup>. Es por eso que a principios de 2019 un grupo de vecinas se reunió para redactar catorce alegaciones, que fueron presentadas por más de mil personas. Fruto de este trabajo ha nacido una nueva asociación vecinal en el barrio, Cuidem Cabanyal Canyamelar, centrando sus esfuerzos en el ámbito urbanístico del barrio, oponiéndose al actual PECC y planteando un modelo urbanístico

alternativo. Nosotros, desde EVC, trabajamos con ellas codo con codo.

Tras este breve recorrido a escala urbana, volvemos a la realidad del barrio. Durante los veinte años de degradación, como es habitual en todo proceso de gentrificación, la desvalorización de las viviendas en general<sup>25</sup> ha supuesto la consolidación de una gran bolsa de población pobre, que okupa viviendas o vive en infraviviendas alquiladas sin ninguna cédula de habitabilidad ni ninguna garantía habitacional similar al respecto. Esta es la consecuencia de la dinámica de desvalorización-revalorización del espacio: el desplazamiento de los pobres de una zona a otra de la ciudad al ritmo de la renovación urbana.

Durante muchos años —sobre todo desde la desaparición de la Plataforma Salvem el Cabanyal—, una parte del vecindario ha venido reclamando una rehabilitación del barrio centrada en señalar la falta de convivencia en ciertas zonas del barrio, donde hay instalados puntos de venta de droga, que están provocando una constante molestia en el vecindario que vive en esas zonas: suciedad, ruido a altas horas de la noche, acosos, faltas de respeto constantes, etc. Frente a este problema en zonas muy concretas, este sector del vecindario ha puesto en marcha una campaña llamada Barris Dignes, basada en reclamar mayor intervención social, de servicios, policial, y en el rechazo a cualquier okupación de viviendas. La consecuencia es que, de forma directa o indirecta, esta reivindicación vecinal repercu-

te en una criminalización de la pobreza, sin distinguir quien produce concretamente la falta de convivencia —y quien no—.

EVC, que siempre hemos tenido muy claro que estamos al lado del vecindario más precarizado y desposeído del barrio, hemos tomado un posicionamiento propio al respecto. Durante mucho tiempo hemos repetido un discurso muy claro en todos los lugares: la falta de convivencia y de respeto en las zonas de mayor concentración de pobreza en el Cabañal, es una consecuencia misma de la pobreza dentro del sistema capitalista, siendo este y sus desigualdades los verdaderos causantes de esta y de algunos de sus efectos secundarios. En cierto modo, ante cada falta de respeto o de convivencia producida en estas zonas, nosotros siempre hemos echado la culpa al capitalismo, exonerando a la persona o personas concretas, porque tomar otro posicionamiento significaba ser parte de la criminalización de la pobreza.

Aun así, recientemente hemos querido hacer una reflexión más profunda matizando nuestro posicionamiento. En un comunicado<sup>26</sup> hemos explicado que sí, que detrás de todo están las causas estructurales de la desigualdad, que generan una infinidad de situaciones problemáticas. Pero detrás de situaciones concretas de falta de respeto, acoso sexual en la calle, o cualquier otra falta de convivencia, hay personas concretas y ninguna de estas actitudes se puede tolerar, independientemente de cual sea el nivel económico. Frente a estas actitudes intolerables es necesario el rechazo de todas.

Pero también hemos querido matizar la manera en que enfrentamos estas situaciones: que la criminalización genérica tampoco es tolerable y, sobre todo, que la policía no soluciona nuestros problemas; que la mejor solución es aquella que se hace con trabajo constante a medio y largo plazo: la misma comunidad vecinal; y que cuanto menos casas vacías y mercantilizadas por turismo haya, cuanto más seamos las mismas vecinas las que utilizemos el espacio público, cuanto más fuertes sean las relaciones y las redes entre vecinas, menos problemas de convivencia surgirán —esto es automático— y más preparadas estaremos para solucionarlos de manera conjunta y autónoma.

En junio de 2018 y ya desde la perspectiva del sindicalismo de barrio, llegan a la asamblea los primeros casos de vecinas que iban a ser expulsadas de sus casas. En un primer momento podíamos dedicar varias asambleas a hablar tranquilamente de cada caso y aunque no partíamos de cero, no teníamos más experiencia que la vivida en nuestras casas. Así, poco a poco, fuimos creando las primeras comisiones de trabajo: jurídica; de negociaciones con los bancos, los fondos de inversión, o las administraciones públicas; de asuntos relacionados con los servicios sociales; de comunicación y difusión hacia fuera de la asamblea; etc. Pero siempre, dejando para la resolución común la estrategia concreta a seguir en cada caso.

Al principio intentamos crear una especie de protocolo a seguir para cada caso que llegara a la asam-



blea. Pero con el tiempo, a pesar de haber ciertos aspectos que se repiten y podíamos tener protocolizados —situación jurídica del caso concreto, cuadro socioeconómico, etc.—, hemos optado por diseñar una estrategia concreta para cada caso. Queremos insistir en una cosa: no hay recetas mágicas, es decir, pensamos que no existe un protocolo mágico ni la mejor y única manera de hacer las cosas; nosotros hemos llevado a cabo la nuestra, que seguro irá mejorando con la experiencia. Lo mejor es que cada asamblea tenga su manera concreta de trabajar los casos, atendiendo a las particularidades de su contexto, a pesar de que sí vemos muy conveniente dialogar con otras luchas de otros territorios para aprender y mejorar.

De este modo, es a partir de septiembre de 2018 cuando efectivamente empezamos a parar desahucios. A la vez, aparecen los primeros dilemas, las primeras dudas y los primeros debates de cómo abordarlos. La primera cuestión —y casi la más importante— es como llegar a todas las vecinas precarizadas que están sufriendo problemas de vivienda y como hacer que pasen a formar parte de la asamblea, es decir, como crear material y físicamente una comunidad en lucha. Como partimos de qué casi la totalidad de la asamblea provenimos de ambientes militantes y politizados, esta será la eterna cuestión. ¿Cómo llegamos a toda la gente precarizada que no ha estado nunca en contacto con ningún ámbito de lucha, que no ha participado de ninguna asamblea, que no parte de una politización concreta; y, a la vez, sin caer

en el puro asistencialismo, convirtiéndonos en una extensión informal de lo que tendrían que ser los servicios sociales y las administraciones públicas? ¿Cómo hacemos todo esto sin caer en el paternalismo del gueto militante pensando que son el resto de personas las que se tienen que politizar a nuestra imagen y semejanza —y no que tal vez somos nosotras los que tenemos que cambiar nuestras dinámicas y códigos para relacionarnos? Quizás, mucha de la gente precarizada y no militante puede tener otros códigos relacionales y maneras de afrontar los problemas de la vida que a nosotros también nos pueden servir. Es más, ¿por qué esa línea divisoria entre ellos y nosotros? Lo cierto es que no tenemos ninguna respuesta mágica.

Todo es cuestión de prioridades, de hacer una balanza entre ganancias y pérdidas y decidirse por alguna de las opciones que tienes para escoger, aunque sea de forma temporal y bajo unos indicadores que, llegado el momento, te permitan cambiar de táctica. Así pues, la manera de llegar a más vecinas es hacer que EVC se conozca en el barrio por su ejemplo práctico, y sobre todo, que se conozca como una herramienta útil. Que las vecinas sepan que si acuden, podrán detener sus desahucios o desalojos. Pero todavía más, que si participan, encontrarán una comunidad de apoyo, que luchar sirve para cambiar las cosas, que sí se puede.

Partiendo de esta premisa hemos establecido otra: el *win-win*: ganar y ganar desahucios. En un primer momento, para que la gente te conozca, hay que obtener victorias, visibilizar cada acto, acción y desahucio pa-

rado. Como no controlamos los *mass media*, utilizamos todas las redes sociales a nuestro alcance, a saco y a todas horas. Tampoco rechazamos nunca ninguna entrevista u oportunidad de salir en los medios convencionales. Para nosotros, a pesar de las contradicciones y manipulaciones, siempre nos ha servido como altavoz y nos ha reportado muchos más beneficios que perjuicios. Para esto, hará falta que parte de la asamblea y las propias afectadas por los desahucios estén dispuestas a dar la cara. Es un precio que, al menos nosotros, hemos optado por asumir<sup>27</sup>.

Hablando de cosas que una asamblea opta por asumir, de momento, somos conscientes que a veces nuestra tarea es asistencialista. Esta es una de las cosas más difíciles de asumir, por eso, lo hacemos de manera relativa y temporal: solo hasta ser un número determinado de vecinas afectadas por expulsiones en la asamblea; solo las primeras veces hasta que aprenden a gestionarse sus cosas más inmediatas; solo si hay una reciprocidad con el resto de vecinas afectadas; y solo en la medida en que el empoderamiento y el aprendizaje se van consolidando. Y sí, funciona. Las vecinas que vienen a la asamblea, con el tiempo aprenden lo que para nosotros es más importante: que existe una vida comunitaria más allá del individualismo capitalista, y que solo luchando entre todas cambiamos las cosas.

Para llevarlo a cabo, cada lugar y cada asamblea es un mundo. Nosotros creemos que para que la gente nueva se sienta cómoda hace falta que se sientan partícipes, que aporten aquello que mejor sepan hacer

y que en las asambleas se les reserve un tiempo para expresar sus problemáticas —es flipante ver como, con frecuencia, parece que lo cuenten por primera vez—. Después, una cosa a mejorar y que también se va haciendo con el tiempo es aprender que la lucha está fuera de las asambleas, que son necesarios más espacios de participación fuera de las asambleas. Este es un defecto del gueto militante que pensamos que poco a poco se va corrigiendo.

Ya para finalizar, haremos un breve comentario en torno a la campaña #CabanyalVsDivarian. En septiembre de 2019, y al ver que más de una familia que había llegado a la asamblea lo hacía bajo la amenaza de Divarian —BBVA y Cerberus, gestionado por Haya Real Estate—, decidimos dar un salto. En lugar de responder caso por caso, hacerlo de manera conjunta, fijando unos objetivos comunes para todas y empezando a realizar acciones de presión —escarnios a oficinas del BBVA y Haya Real Estate, etc.— Al principio no sabíamos muy bien como podía salir la cosa, si seríamos capaces o no de cumplir las expectativas que nos habíamos generado. Ahora nos damos cuenta que lo mejor que pudimos hacer es arriesgar y seguir adelante. Esta actitud la estamos intentando replicar en cada propuesta que nos hacemos a nosotras mismas, y la verdad, nos está funcionando.

Otro aspecto que hemos aprendido es sobre la cuestión mediática. Toda acción que después no difundimos o no hacemos pública, parece que no exista. Esto tie-

ne sus aspectos negativos —espectacularización, etc.—, pero desgraciadamente, hay una dinámica que se repite: acción —detener un desahucio, realizar un escarnio o lo que sea—, mediatización de la acción, puesta en el tablero de la agenda pública local. En consecuencia, los políticos se pronuncian y, finalmente, los responsables del banco o fondo de inversión te escuchan. Esta dinámica, que ya es conocida por todo el mundo, comporta sus peligros que tendremos que enfrentar más pronto que tarde, como la dependencia de los *mass media* para poner en la agenda pública nuestras luchas.

En tercer lugar, y seguramente lo más importante, es que estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca. Estamos descubriendo que esta es la manera en qué nosotros marcamos los ritmos de nuestra lucha. Es así como adoptamos cada vez una visión más estratégica de cara al futuro, es decir, es muy importante no estancarse con aquello que se te da bien y funciona, sino que hace falta siempre dar un paso adelante y probar nuevas tácticas y nuevas vías de incidencia y de presión para conseguir tus objetivos. Queremos, para terminar, mencionar una de las cosas que mejor nos ha funcionado: cada acción, cada acto, cada desahucio, cada escarnio; en definitiva, cada vez que hemos salido de las asambleas a la calle, hemos ganado, tanto en gente en nuestras asambleas como en fuerza colectiva.



# Notas

<sup>1</sup>Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca «en el Estado Español, ha habido 1.001.593 desahucios desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008 hasta el tercer trimestre de 2019». Ester Fayos en *La Directa* (17.12.2019).

<sup>2</sup>cf. Suriano, J. (1983). *La huelga de inquilinos de 1907*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina; y Aisa Pàmpol, M. (2014). *La huelga de alquileres y el comité de defensa económica. Barcelona, abril-diciembre de 1931. Sindicato de la Construcción de CNT*. Barcelona: El Lokal.

<sup>3</sup>Imposición de cultivos únicos, por parte de terratenientes locales y empresas internacionales, basados en la caña de azúcar, la papa, el tomate y el plátano.

<sup>4</sup>Del inglés *gentry*. Muy resumidamente, la sustitución de una determinada población que habita un lugar —un barrio—, por otra de mayor poder adquisitivo. (Nota de los Editores).

<sup>5</sup>Rondando los mil en cada uno de los trimestres de 2019, según los datos oficiales del Consejo del Poder Judicial, que obviamente, no recoge los «desahucios silenciosos» que no llegan a judicializarse.

<sup>6</sup>La comunidad La Esperanza es el mayor proyecto habitacional impulsado por la FAGC. Se trata de unos bloques de 77 viviendas, donde viven sendas familias sumando, en total, más de 200 personas. Como señaló en su día la prensa, «la mayor comunidad ‘okupa’ de España». (N. de los E.).

<sup>7</sup>Extraído de una octavilla-manifiesto de los inicios del Ateneu La Base.

<sup>8</sup>«La emancipación de los obreros solo puede ser obra de los obreros mismos». Uno de los principios básicos de la Primera Internacional (1864), asociación creada con la finalidad de agrupar internacionalmente todas las organizaciones obreras y, mediante la acción combinada de todas ellas, llevar a la humanidad a la Revolución.

<sup>9</sup>Los pisos colmena son cápsulas individuales en el interior de una vivienda compartida con espacios comunes —el lavabo o la sala de estar—, de dimensiones infrahumanas —unos 2,6 metros cuadrados: 1,2 metros de ancho, 1,2 de altura i 2,2 de largo—. Existen de forma clandestina pero también algunas empresas —como Haibu 4.0— han iniciado su comercialización en Barcelona, con precios muy por debajo de un alquiler «normal» —entre 200 y 300 €—. (N. de los E.).

<sup>10</sup>Coordinadora de Jubilats i Pensionistes d'AAVV BCN, AMPA CEIP Jacint Verdaguer, Parròquies de Poble Sec, La Raposa Llibreria feminista, Plataforma Som Paralel, Coordinadora d'entitats, Babàlia Criança Compartida, Castellers de Poble Sec, Laboratori Reversible, Etnogràfica Antropologia per a la transformació social, AFA Escola Poble Sec, Altaveu de Poble Sec, Associació Cúrcuma, El Monstre de Paper, Raons Públiques, Ateneu La Base, Cooperasec y Trocasec.

<sup>11</sup>La respuesta literal de un comercial de Tecnocasa, cuando lo encaramos como especulador y parte del problema, fue que ellos eran una inmobiliaria «de barrio» y que estaban muy preocupados por que la gente consiguiese una vivienda.

<sup>12</sup>Llibre Negre del Sindicat de Barri.

<sup>13</sup>Las personas y las familias vulnerables que se enfrentan a un desahucio no lo han de hacer solas. El acompañamiento de los servicios municipales para encontrar una solución funciona y evita situaciones angustiosas a las personas afectadas.



<sup>14</sup>Dossier BCN vs Norvet.

<sup>15</sup>La Taula d'Habitatge (Mesa de Vivienda) es un órgano tripartito entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat y el Ayuntamiento, donde se colocan en una lista de espera, por orden de urgencia, los casos más graves de falta de vivienda y en paralelo, los pisos disponibles por parte de estas instituciones. El resultado, dado el inexistente parque público de vivienda, es una agonía de meses y años para acceder a uno de estos pisos.

<sup>16</sup>En la «bienvenida», en un espacio separado, un par de personas del Sindicat reciben a los recién llegados para explicarles nuestro funcionamiento: la importancia del apoyo mutuo, que nadie cobra, que no somos una ONG, que nos ayudamos los unos a los otros, etc.

<sup>17</sup>Este texto ha sido redactado durante las semanas previas al inicio de la década de 2020.

<sup>18</sup>Mensaje de clausura publicado en el Twitter del I Congreso de Vivienda de Cataluña, el 17 de noviembre de 2019.

<sup>19</sup>Este es un análisis rápido, a modo de introducción, para situar al lector que no conozca el contexto del barrio. Para una visión más detallada: Grup Aürt. (2015). *De la prolongació a la gentrificació*. Disponible en línea en: <<https://ateneullibertaricabanyal.wordpress.com/2015/10/19/de-la-prolongacio-a-la-gentrificacio-reflexions-sobre-el-conflicte-del-cabanyal-set-2015/>>; Varios Autores. (2017). *La nova marca Cabanyal. El govern del canvi de formes però no de fons*. En *El Cor de la bèstia*, Valencia: Caliu Espai Editorial; y Anónimo. (2014) *Cuando la brisa hace caer las máscaras. Reflexiones acerca de la lucha en el Cabanyal*. (2005-2011).

<sup>20</sup>Con la entrada del tripartito del Govern de la Nau al ayuntamiento —Compromís, PSOE y Podemos— y la declaración del PEPRI como expolio por parte del gobierno central.

<sup>21</sup>Por comunidades en lucha entendemos espacios de relaciones comunitarias —locales— donde poder aprender a relacionarnos fuera de las reglas sociales del capitalismo, basadas en el apoyo mutuo, la acción directa, la horizontalidad, el valor de uso y no de cambio, el compañerismo, la solidaridad, la reciprocidad, el respeto, el antiautoritarismo, la autonomía, etc.; y dónde sobre todo, aprender que solo desde la lucha podemos cambiar el «estado de las cosas».

<sup>22</sup>*cf.* Anónimo. *op. cit.*

<sup>23</sup>Como el nombre de Espai Veïnal del Cabanyal ya era conocido en todo el barrio, decidimos no cambiarlo sino simplemente añadirle el subtítulo «Sindicalisme de Barri».

<sup>24</sup>Como no es el objeto de este texto no entraremos a analizarlo, solo decir que este, tal como está redactado actualmente, no supondrá ninguna barrera ni impedimento al proceso gentrificador que está viviendo el barrio.

<sup>25</sup>A diferencia de otros barrios de la ciudad o, incluso, otras ciudades, en el Cabañal hemos llegado a tener centenares de viviendas de titularidad pública vacías, más de 600 entre solares y casas. Una cantidad muy elevada en relación con las que están en manos de bancos o son propiedad privada. Esto se explica porque durante los años del *boom* inmobiliario —en los noventa y dos mil—, un plan urbanístico prohibía la venta de viviendas entre particulares y/o entidades financieras en gran parte del barrio, permitiendo únicamente la venta al Ayuntamiento.

<sup>26</sup>Escrito en otoño de 2019, disponible en línea en:  
<[www.facebook.com/EspaiCabanyal/posts/2513437682104960](https://www.facebook.com/EspaiCabanyal/posts/2513437682104960)>

<sup>27</sup>A pesar de que hemos optado por prescindir de algunos apartados de los diferentes textos que componen el libro, para que no se repitan, en este caso hemos considerado interesante comprobar como distintos colectivos han llegado a conclusiones muy similares. (N. de los E.).



# Índice

Editorial . . . . .	5
Federación Anarquista de Gran Canaria . . . . .	9
Sindicat de Barri del Poble Sec . . . . .	25
Espai Veïnal del Cabanyal . . . . .	69
<i>Notas</i> . . . . .	95





